

Control y manejo local de nuestras aguas como bien común

Luchas ejemplares y desafíos



Crédito de foto, Lucero Gonzalez



www.canadians.org



www.ourwatercommons.org



www.boell-latinoamerica.org

Autor principal:

Dr. Adam Davidson-Harden, Profesor Adjunto, Estudios Internacionales, Universidad Wilfrid Laurier

Colaboradores

Susan Spronk, Investigadora Pos-doctoral, Universidad de Cornell

David McDonald, Profesor Asociado y Director, Departamento de Estudios Internacionales de Desarrollo, Universidad de Queen (Kingston, Ontario)

Karen Bakker, Profesora Asociada, Departamento de Geografía y Directora, Programa sobre gobernanza del agua, Instituto de Recursos, Medioambiente y Sustentabilidad, Universidad de Columbia Británica.

2 Notas y agradecimientos

Si bien Adam Davidson-Harden coordinó y dirigió la redacción del informe, el resultado final es producto de un verdadero trabajo en equipo. Los colaboradores, Susan Spronk, David McDonald y Karen Bakker, contribuyeron con “herramientas” al informe, y brindaron valiosos comentarios durante el proceso. Anil Naidoo y Daniel Moss apoyaron en la edición y nos ayudaron a diseñar un curso que hiciera justicia con las intenciones y objetivos de la documentación de herramientas prácticas para apoyar la teoría y la práctica de un movimiento mundial de justicia por el agua. Para que muchas más colegas puedan leer y añadir sus propios casos, la Fundación Heinrich Boll ha traducido esta antología en español. Estamos endeudados con ellos por su apoyo en fortalecer un movimiento mundial. Aunque el proyecto enfrentó algunos desafíos, ha sido una experiencia reveladora, fascinante y gratificante para todos nosotros. Sobre todo, queremos expresarles nuestra gratitud y reconocimiento a los activistas y trabajadores comunitarios que diariamente buscan soluciones a la crisis del agua desde la primera línea de batalla y con un enfoque de ámbitos comunes. Estamos en deuda con ellos y ellas por su creatividad y perseverancia en preservar y administrar en todo momento ese preciado recurso común que es el agua.

Adam Davidson-Harden

ÍNDICE

Introducción: Muchos caminos, metas comunes	9
Caso 1: La ofensiva por un Convenio de la ONU sobre el Derecho al Agua	11
Caso 2: Iniciativas legislativas para garantizar el “Derecho al Agua” en América Latina	13
Caso 3: El derecho constitucional al agua en Sudáfrica	15
Caso 4: El derecho constitucional al agua en Sudáfrica	17
Caso 5: ‘Control Social’ y asociaciones públicas/colectivas con sistemas comunitarios en Cochabamba, Bolivia	19
Caso 6: Pequeños agricultores y el concepto indígena de “Usos y Costumbres”	21
Caso 7: La ‘acequia’ como sistema de riego y gestión del agua	23
Caso 8: Las luchas de los pueblos indígenas por el agua en Ecuador: el caso de Licto	25
Caso 9: La lucha de las naciones originarias por el agua: Los casos de los pueblos Black Mesa y St’at’imc	27
Caso 10: Gestión pública del agua en Porto Alegre, Brasil	29
Caso 11: Asociaciones entre organismos públicos relacionados con el agua	31
Caso 12: Cooperativas de empleados en el sector del agua: El caso de Dhaka WASA	33
Caso 13: Retomar el control público de una gran empresa de agua: Yorkshire Water y Welsh Water	35
Caso 14: Democracia hidrológica en acción: Asociaciones de gobernanza delegada (o compartida) del agua	37
Caso 15: Mito de la pobreza pública cuestionado: Mecanismos alternativos de financiamiento	39
Caso 16: MAMA-86 y el agua en Ucrania	41
Caso 17: Tarun Bharat Sangh y el agua comunal en Rajastán	43
Caso 18: “Fideicomisos de bienes comunes” como proyecto político y económico	45
Caso 19: La lucha por agua pública en Felton, California	47
Caso 20: Un fondo fiduciario para mantener el agua limpia, segura y accesible	49
Caso 21: Por el bien público, establecer límites a la extracción de aguas subterráneas	51
Caso 22: Tribunal Latinoamericano del Agua: Usando leyes nacionales e internacionales como base para una ética del agua	53
Conclusiones: Mapeo de diversas concepciones y estrategias para el agua como bien común	55
Fuentes y bibliografía recomendada	59
Enlaces y recursos	63



Crédito de foto, Instituto Sobre la Naturaleza y la Sociedad Oaxaqueña

Resumen ejecutivo

CONTROL Y MANEJO LOCAL DE NUESTRAS AGUAS COMO BIEN COMÚN Luchas Ejemplares Y Desafíos

Imagina cuando nuestros sistemas de manejo del agua administren este precioso recurso teniendo en cuenta a las próximas siete generaciones, para toda la tierra, para toda la gente, para todos los tiempos. Qué aspecto tendrían nuestros sistemas jurídicos, nuestra ingeniería, nuestras prácticas de servicios públicos e incluso el tejido social de nuestras comunidades si manejáramos el agua como un bien común?

El cambio climático y las profundas injusticias sociales hacen que compartir el agua entre toda la gente del mundo constituya hoy un desafío urgente para nuestra generación. Tenemos que deshacernos juntos de la falsa ilusión de que el agua dulce es ilimitada, y actuar sabiendo que el agua no es una mercancía sino un precioso bien común. Cuando hayamos aprendido a administrar mejor el agua y compartirla seremos mejores personas, ciudadanos del mundo responsables con más esperanzas de un futuro justo y saludable. “Control y manejo local de nuestras aguas como bien común: luchas ejemplares y desafíos” reúne 21 casos de todo el mundo que ofrecen reflexiones sobre las luchas por el agua fundadas en el reclamo del agua como bien común. Los casos presentan innovaciones en áreas tan importantes como nuevos marcos jurídicos, manejo del suministro público de agua y sistemas justo de precios, y métodos para proteger el derecho de la Tierra misma al agua.

Las alternativas que se describen en estos estudios de caso —que no son más que una pequeña muestra, ya que hay verdaderamente gran riqueza de ellas—ilustran el trabajo innovador que hoy se está llevando a cabo en todo el mundo.

Derechos humanos consagrados en la ley:

Desde Uruguay hasta Sudáfrica pasando por las Naciones Unidas, las organizaciones comunitarias han buscado establecer —y en algunos casos lo han conseguido—acuerdos vinculantes y leyes que declaran al agua como un derecho humano fundamental. Aunque tales declaraciones vean a menudo comprometida su eficacia debido a la falta de voluntad política y capacidad de aplicación, ellas son claramente la expresión de la voluntad popular que en todo el mundo reclama que no se le puede negar a nadie la vida que el agua da. Hoy en día están cobrando ímpetu las iniciativas legislativas y constitucionales para proteger el agua como un bien común.

Control comunitario, suministro público y democratización:

Gran Bretaña y California, las comunidades están retomando el control de los sistemas públicos de abastecimiento de agua tras el fracaso de las experiencias de privatización. A prueba y error, llevan adelante experiencias de servicios de abastecimiento de agua en manos de la comunidad que suministran agua de buena calidad a precios justos.

Para lograrlo tienen que combatir y derrotar a los mecanismos injustos tales como los contadores de agua pre-pagos que le cortan el agua vital a las familias que no pueden pagarla. Además se están cuestionando si los sistemas de un “mínimo vital gratuito” no son simplemente mecanismos disfrazados de recuperación de costos despiadada.



Crédito de foto, Andy Lin

Inversión adecuada en infraestructura:

Desde Bangladesh hasta el Brasil, y a través de aparcerías y asociaciones entre entidades públicas en todo el mundo, las empresas públicas de abastecimiento de agua potable buscan procurarse financiamiento de largo plazo —especialmente crédito público en lugar que capital privado— esencial para mejorar la infraestructura de abastecimiento. Estas empresas públicas están revirtiendo la ola privatizadora, rechazando la financiación condicionada que ofrecen los bancos de desarrollo cuando se privatizan las empresas públicas. En contraste, estas empresas públicas tratan de aprender unas de otras cómo superar obstáculos administrativos, de ingeniería y financieros.

Derechos de la Tierra y entidades de cuenca:

Desde Rajastán a Estados Unidos, hay grupos locales organizados en torno a los contornos naturales —las cuencas hidrográficas del mundo— que están tomando en sus manos el gobierno del agua. En la India, Tarun Bharat Sangh construye con tierra represas de agua de pequeña escala que sirven para cosechar las aguas pluviales y mejoran la recarga de los acuíferos. Administrar el agua como un bien común significa respetar también los derechos de la Tierra al agua.

Proteger los usos tradicionales y colectivos del agua:

Desde la región andina en Sudamérica hasta el sur-occidente de Estados Unidos, las comunidades indígenas están sentando precedente al presionar a sus gobiernos para que reconozcan los derechos colectivos al agua y los usos tradicionales de las fuentes de agua (pozos, manantiales, embalses, ríos y aguas pluviales). Entre los usos tradicionales se cuentan el control, responsabilidad y manejo colectivos de los sistemas de riego y los manantiales, por ejemplo. Los casos que aquí se presentan bajo esta categoría promueven el bien común y una noción de los derechos de propiedad en la que el colectivo prima por encima del interés individual y la empresa.

Fideicomisos de bienes comunes:

Con el fin de frenar la explotación insustentable de bienes comunes naturales como el agua subterránea, algunos estados de Estados Unidos como Vermont han aprobado leyes que reconocen al agua subterránea como propiedad común, sujeta a restricciones y límites de uso y a las prioridades que establezca la comunidad. Ese tipo de restricciones podría por ejemplo restringir la mercantilización del agua a manos de las empresas embotelladoras y privilegiar en cambio los usos esenciales; las tarifas que se le cobran a las industrias podrían alimentar un fideicomiso público cuyo uso podría definirlo el público.

La intención es que estos casos que aquí presentamos inciten al diálogo y a la formulación de nuevas estrategias en pos de justicia hídrica. El documento completo está disponible en www.onthecommons.org/water. Hay abundancia de desafíos, contradicciones y preguntas que debemos explorar y resolver juntos como sociedad de ambientalistas, ingenieros, abogados, políticos, administradores públicos de agua y demás. En la búsqueda de soluciones positivas frente a las limitaciones de nuestros sistemas actuales de manejo del agua —y utilizando los principios de los bienes o ámbitos comunes como guía (sobre este tema, ver el documento de Maude Barlow al respecto en www.onthecommons.org/water), juntos generaremos la cooperación y el poder político necesarios para superar los desafíos que enfrentamos en común.



Crédito de foto, Grassroots International

Introducción

Muchos caminos, metas comunes



Crédito de foto, Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca (INSO)

A pesar de lo aterradora que es la realidad de un abastecimiento y acceso cada vez escaso al agua limpia, vivimos en un momento histórico desafiante y prometedor para forjar soluciones sustentables. Entretejadas, las iniciativas locales y regionales de gestión comunitaria del agua conforman un movimiento mundial de reivindicación y rescate de nuestras aguas como bien común.

Tal y como señala Maude Barlow —Presidenta Nacional del Consejo de Canadienses y Asesora del Presidente de la Asamblea General de la ONU sobre temas relacionados con el agua— en el documento de apoyo a este informe *‘El agua nuestro bien común: hacia una narrativa del agua’*: “Hoy existen dos narrativas antagónicas sobre los recursos de agua dulce de la Tierra, en conflicto desde los albores del siglo XXI. Por un lado está el poderoso círculo de los tomadores de decisiones, los líderes de algunas potencias, las instituciones comerciales y financieras internacionales y las empresas transnacionales, que no ven el agua como parte de los ámbitos comunes mundiales ni como un bien público, sino como una mercancía que se compra y se vende en el mercado abierto. Por otra parte está el movimiento mundial de organizaciones de base, integrado por comunidades locales, pobres, habitantes de asentamientos precarios, mujeres, pueblos indígenas, campesinos y pequeños agricultores que trabajan en conjunto con los ambientalistas, los activistas de derechos humanos y los administradores y expertos del agua progresistas tanto del Norte como del Sur global, que considera el agua como un bien común y se propone que haya agua para toda la naturaleza y para todos los seres humanos.” En este informe compartimos una muestra de “casos” reveladores que ojalá les sirvan como referencia en sus prácticas organizativas para que ustedes puedan construir sus propias experiencias en la lucha en pos de la justicia por el agua.

En las últimas décadas hemos sido testigos del avance desparejo de proyectos de agua financiados públicamente para promover la idea del agua como fideicomiso y bien común, al menos de manera implícita.¹ Claro está que estas iniciativas todavía se ven desfiguradas por antiguos y nuevos patrones de explotación económica y saqueo de recursos, tanto dentro como entre los países. Sin embargo, lo más prometedor ha sido que para revertir el deterioro de la infraestructura y los servicios públicos, hay organizaciones de la sociedad civil y gobiernos innovadores que están fomentando y expandiendo el manejo y la administración efectiva de nuestros ámbitos comunes —ya sea el aire, el suelo, el agua, la Internet o la salud pública.

Esta agenda de inversiones públicas implica por lo menos un modesto programa de reforma social enfocado a la igualdad y universalidad del acceso (cuando no a la sustentabilidad ambiental), y cuenta con el respaldo de un nuevo discurso de derechos humanos promovido a través de la ONU y crucialmente influido por gobiernos del Sur global. Las razones políticas para extender el acceso al agua a través de proyectos públicos están fundadas en un argumento básico: el acceso a agua limpia y segura para el sustento, el saneamiento y la industria es bueno para todos. Más de 1.200 millones de personas no tienen acceso a agua potable segura; 2.600 millones no tienen acceso a agua segura para el saneamiento, y más de 5 millones siguen muriendo en el Sur y en las comunidades indígenas del Norte² a causa de enfermedades prevenibles transmitidas por el agua. Los beneficios del acceso al agua se distribuirían verdaderamente por toda la sociedad, facilitando todos los aspectos de la vida humana: la cultura, el medioambiente, la economía y la industria.

La iniciativa empresarial de cercamiento y apropiación de los ámbitos comunes de agua —ya sea a través de la mercantilización del agua al embotellarla y venderla, la privatización de las empresas públicas de abastecimiento de agua potable, o por otros medios— pone claramente de manifiesto el abanico completo de los desafíos que enfrenta el pujante movimiento de justicia por el agua. Tal mercantilización de este don de la naturaleza es a la vez un desafío y una provocación. En estos momentos que el movimiento traza sus derroteros, nos miramos unos a otros en busca de apoyo e información, y lo que es más importante, en procura de alternativas positivas. Nos necesitamos unos a otros cada vez más, a medida que bregamos por definir nuestro programa para los ámbitos comunes de agua, en pos del acceso equitativo y el manejo sustentable del agua.

A medida que buscamos entender más cabalmente en qué circunstancias funcionan mejor las alternativas locales para un control democrático, equitativo y sustentable de los ámbitos comunes de agua, los activistas que luchan en pos de justicia por el agua en el Norte y el Sur continúan redescubriendo la riqueza de alternativas que entrañan las sociedades indígenas que la llamada “modernización” ha dejado de lado, excluyéndolas y degradándolas. Nos encontramos maravillados ante la asombrosa diversidad de tradiciones económicas y políticas culturalmente específicas que existen y se están creando con respecto al agua. Estos experimentos vivos, presentes tanto en sociedades indígenas como no indígenas, nos ayudan a redefinir el significado y la práctica de la justicia en torno al agua y del agua como bien común.

Con el propósito de explorar dichas soluciones positivas, este informe reúne 22 “herramientas” o casos de acción local que hacen énfasis en el control local de los ámbitos comunes de agua en pos un acceso equitativo y la sustentabilidad. Esta recopilación de ninguna manera es completa. De hecho, esta es la fortaleza de las alternativas que existen: hay una verdadera riqueza de ellas. Estas herramientas tienen como objetivo provocar la discusión y el diálogo, y hacer que surjan más preguntas y respuestas. Como equipo de investigación que trabajó en este informe, después de cada herramienta hemos planteado algunas preguntas que esperamos sirvan como punto de partida para el debate posterior. Sabemos, sin embargo, que ustedes agregarán muchas de sus propias interrogantes que surgen de su propia experiencia. En las conclusiones reunimos algunos de los temas principales, críticas y desafíos que emergen de las herramientas.

Para nosotros como equipo de investigación, estas alternativas a la crisis mundial del agua demuestran la fortaleza creciente de un movimiento de justicia por el agua enfocado en las soluciones, y el poder que tiene el agua como bien común para reunirnos en una causa común. Gracias por reflexionar en torno a este documento y por considerar la posibilidad de agregar sus propias ideas. Si escriben y presentan sus propios casos, podrán contribuir a modificar y dirigir el movimiento de justicia por el agua, y escuchar y compartir las historias y desafíos de unos y otros, y celebrar conjuntamente las victorias. Nos honra trabajar con ustedes en la promoción de los ámbitos comunes de agua mundiales.

¹ Los movimientos sociales tuvieron y siempre han tenido un papel fundamental de presión sobre los Estados en la lucha por este tipo de reformas sociales, entre ellas los reclamos y defensa de otros bienes comunes como la salud y la educación. (Watkins, 2006). Ver también el sitio web del Informe de Desarrollo Humano 2006: <http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2006/>

Caso 1

La ofensiva por un Convenio de la ONU sobre el Derecho al Agua

Introducción

El enfoque de derechos humanos ha sido una base sólida desde la cual se ha promovido la justicia social y la sustentabilidad ecológica en todo el mundo. Sin embargo, nuestras mejores intenciones y declaraciones se ven permanentemente comprometidas por la falta de voluntad política, falta de poder de las organizaciones de base para lograr que se respete la voluntad popular, y la poca capacidad que existe para dar cumplimiento y realización a los derechos tal y como ellos aparecen en el papel. Esto se ve agravado por la voluntad que tienen los promotores de la privatización del agua de cooptar el discurso de los derechos humanos para sus propios fines. Hay quienes piensan que centrar los esfuerzos en el agua como derecho humano es un error, mientras que otros lo ven por lo menos como un primer paso en pos de la sustentabilidad y el acceso para todos.

La red de Amigos del Derecho al Agua ha trabajado mucho en los últimos años para promover la idea de un nuevo convenio vinculante que consagre al agua como un derecho humano fundamental. A pesar de los desafíos que enfrenta, entre ellos su componenda con las corporaciones en torno a normas voluntarias de calidad social y ambiental en el contexto del Pacto Mundial y la falta de un medio coherente para aplicar y respetar los derechos humanos, la ONU sigue siendo la única organización política internacional con la capacidad de dar a luz una nueva generación de derecho internacional consuetudinario (que derive de las costumbres y la práctica en lugar que de las leyes escritas). Dichos mecanismos pueden y han sido incorporados a los ordenamientos jurídicos nacionales, aunque no de manera consistente. Los Amigos del Derecho al Agua esbozan algunos principios básicos que podrían tenerse en cuenta en la construcción de un nuevo convenio mundial.

Principios clave

- El agua es necesaria para la vida en la Tierra.
- El agua es un derecho humano fundamental, y requiere que los Estados tengan la voluntad y la capacidad de cumplir con sus obligaciones de respetar, proteger y realizar el derecho a un acceso adecuado al agua potable y el saneamiento.
- Para honrar sus compromisos de realización del derecho al agua, los Estados tienen la obligación de proveer agua y saneamiento adecuado, seguro, accesible y asequible para todas las personas que actualmente carecen de dicho acceso dentro de su jurisdicción, con un trato preferencial y acciones positivas para los pobres y marginados. Los Estados deben garantizar que el agua sea destinada prioritariamente a satisfacer las necesidades básicas de la población y sostener los medios de vida de los pueblos.
- El agua es un bien común, no una mercancía, y pertenece a todos los seres humanos y al planeta. Como tal, el agua debe permanecer en el dominio público.
- Los Estados tienen la responsabilidad de garantizar la preservación de los ecosistemas de agua dulce, evitar el consumo desmedido de agua, la degradación de los sistemas hídricos y proteger las cuencas.
- Se necesita suficiente agua limpia para proteger los ecosistemas y otras especies. Los ecosistemas sanos garantizarán el derecho humano al agua para las generaciones futuras.
- Los Estados tienen la obligación de garantizar los principios de participación y transparencia en el ejercicio de los derechos humanos, lo que implica que los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento deben permanecer bajo el control público democrático, de manera tal que los usuarios y el público participen plenamente en la toma de decisiones referentes a la gestión, manejo y asignación de los recursos hídricos.
- Los recursos hídricos que se encuentren completamente dentro de las fronteras de un Estado son parte del patrimonio nacional y no deben ser jamás objeto de explotación extranjera.

Preguntas

Cuáles son algunas de las debilidades y fortalezas de optar por la “ruta de la ONU” para declarar el agua como derecho humano?

Cuál es la sinergia entre luchar por el agua como derecho humano y lograr que se reconozca al agua como bien común?

Notas y enlaces

www.blueplanetproject.net

Ver el libro del Banco Mundial sobre el derecho humano al agua en:

<http://lnweb18.worldbank.org/EXT/epic.nsf/ImportDocs/8525729D0055F87B852572F00054DB08?opendocument>

www.unglobalcompact.org



Caso 2

Iniciativas legislativas para garantizar el “Derecho al Agua” en América Latina

Introducción

Durante la ola privatizadora de la década de 1990, las empresas multinacionales del agua concentraron sus inversiones en los continentes más urbanizados del Sur global, América Latina y Asia Oriental, donde la población goza de cierta prosperidad y las economías de escala son posibles. La privatización generó inmediatamente controversias y creciente insatisfacción pública contra los servicios de abastecimiento de agua insuficientes e inequitativos. En todo el mundo surgieron diversos movimientos sociales en defensa del agua como bien común, pero donde crecieron con mayor urgencia, fuerza y mejor enfocados fue en América Latina, un continente caracterizado por fuertes tradiciones de anti-imperialismo y nacionalismo económico. Entre sus formas de lucha, los movimientos sociales han incluido, entre otras, las iniciativas constitucionales para consagrar el “derecho al agua”.

Una de las victorias más famosas de la oleada de iniciativas por garantizar el derecho al agua ocurrió en Uruguay, donde la gente organizó exitosamente un referendo nacional sobre el derecho al agua. En 2002, el gobierno uruguayo firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por medio del cual el gobierno prometía privatizar los servicios públicos de abastecimiento de agua potable. Se firmaron dos concesiones en el departamento de Maldonado, mediante las cuales se transfirió el control de los servicios públicos de agua y saneamiento a Aguas de la Costa (una filial de la multinacional francesa Suez) y Uragua (filial de la empresa multinacional Aguas del Bilbao de España). En respuesta, en 2004 una campaña ciudadana coordinada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida obligó al gobierno a reformar la constitución para que declarara el acceso al agua como un derecho humano y garantizara que su gestión permanezca en manos del Estado. Esta fue una importante victoria del movimiento social, y así se consagró por vez primera el derecho al medioambiente como un derecho constitucional. Desde entonces surgieron otras iniciativas de enmienda similares asociadas al derecho al agua en Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador y México.

Si bien las iniciativas para garantizar legalmente el “derecho al agua” pueden brindarles a los activistas de los movimientos sociales una herramienta para presentar demandas en los tribunales nacionales, esta herramienta se ve debilitada por la falta de mecanismos de aplicación. En Uruguay, por ejemplo, menos de un año después que fuera aprobada la modificación a la constitución, el gobierno de Tabaré Vázquez emitió un decreto según el cual a las compañías privadas que firmaron contratos de concesión antes del referendo se les permitiría seguir funcionando. Como sostienen Carlos Santos y Sebastián Valdomir, el gobierno uruguayo se negó a cumplir a cabalidad la voluntad popular por miedo a que las empresas tomaran represalias y demandaran al gobierno en tribunales arbitrales internacionales. Las inversiones de las empresas están protegidas a menudo a través de de tratados bilaterales de promoción y protección recíproca de las inversiones que cuentan con poderosos mecanismos de aplicación mediante tribunales arbitrales privados internacionales ante los cuales las empresas pueden demandar legalmente a los Estados (en procesos conocidos como ‘inversionista-Estado’). Como indica el experto legal Gus Van Harten, el sistema internacional de protección a los inversionistas estipulado en esos tratados bilaterales “avanza mucho más lejos que otros regímenes internacionales que dan acceso individualizado a las instituciones internacionales de gobierno”, tales como la legislación internacional sobre derechos humanos y el derecho humanitario. En otras palabras, aunque el derecho al agua puede estar garantizado en el derecho “débil” (“soft” law), los tratados internacionales que buscan proteger los derechos de los inversionistas pueden fácilmente tomar precedencia y restringir o anular su aplicabilidad.

Vistas las limitaciones con que se topan las iniciativas asociadas al derecho al agua, hay cada vez más gente que opina que los instrumentos legales por sí solos son herramientas más bien desafiladas para luchar contra las iniciativas de privatización del agua, y que a los movimientos sociales les sería útil promover también la noción y el enfoque de “los bienes comunes”. Como explica la experta legal boliviana Rocío Bustamante, “La idea básica es repensar el concepto de los derechos con relación a la gestión de los recursos naturales como el agua, lo cual permitirá tener una relación más creativa con la naturaleza, porque los recursos naturales existen para que todos los compartamos, incluso los seres vivos no humanos. Debemos comenzar con el principio de solidaridad, que trasciende la idea de “derecho”.

Un “derecho” siempre implica que identifiquemos quién tiene determinado “derecho”, quién se supone que lo debe garantizar, y quién tiene personería jurídica. En cambio, si se considera a los recursos naturales como “bienes comunes”, entonces no pertenecen a nadie en particular”. Esta falta de definición e identificación de la propiedad puede ser problemática, como atestigua “La tragedia de los comunes” de Garret Hardin, y a menudo se abusa de ese argumento para sostener que el concepto de los bienes comunes está fatalmente equivocado. Pero se pasa por alto que el concepto de bienes comunes puede contribuir a desencadenar la creatividad de las instituciones públicas y de la sociedad civil en pos del manejo sustentable de nuestros preciados recursos vitales.

Preguntas

Necesitan acaso los movimientos en pos de justicia en torno al agua optar entre el enfoque de “los bienes comunes” y el de “derechos humanos”?

Qué tenemos que hacer para garantizar que las grandes empresas y los ricos no comprometan el espíritu de las leyes que promueven el derecho al agua?

Notas y enlaces

Ver el artículo de Bustamente escrito en 2007: “Debemos comenzar a cuestionar la idea del derecho al agua” www.pieb.com.bo/noticia.php?idn=2055.

También los siguientes artículos:

Bakker, K. (2007), *The “Commons” Versus the ‘Commodity’: Alter-globalization, Anti-privatization and the Human Right to Water in the Global South*, *Antipode* 39(3): 430-455.

Santos, C. y S. Valdomir (2006), *Uruguay: la democracia directa en la defensa del derecho al agua. Movimientos sociales y luchas por el derecho humano al agua en América Latina*. ILSA, Bogotá, Colombia, Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos. 34: 171-179.

Van Harten, G. (2005). *Private authority and transnational governance: the contours of the international system of investor protection*, *Review of International Political Economy* 12(4): 600-623.

Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida de Uruguay:
www.evib.ch/cm_data/Comision_Nacional_Defensa_Agua_EN_edited_.pdf



Crédito de foto, Linda Mason

Caso 3

El derecho constitucional al agua en Sudáfrica

Introducción

Los derechos al agua nacionales incluidos en la constitución ofrecen esperanza de un enfoque sistemático para trabajar en pos de un acceso igualitario y sustentable al agua. ¿En el caso de Sudáfrica, está la ley acaso a la altura de sus ambiciones?

Junto con el derecho a una alimentación suficiente, servicios de asistencia médica y seguridad social, la Constitución sudafricana incluye el derecho a “suficiente agua”. El deber de respetar estos derechos es de carácter tanto negativo como positivo. Por un lado, el Estado debe abstenerse de interferir injustificadamente con el ejercicio del derecho, inclusive:

- Mediante toda práctica o actividad que niegue o limite el acceso igualitario al agua de buena calidad.
- Contaminando o disminuyendo ilegalmente el flujo de agua.
- Limitando el acceso a los servicios de agua potable o destruyendo la infraestructura como medidas punitivas.
- Desconectando o excluyendo a usuarios del servicio de agua potable arbitraria o injustificadamente.
- Aumentando discriminatoria o excesivamente los precios del agua.
- Contaminando y menguando los recursos hídricos que afectan la salud humana.

Por otro lado, los derechos son positivos en el sentido de que se está obligado a protegerlos, promoverlos y cumplir con ellos. El Estado debe “adoptar medidas legislativas razonables u otras que se encuentren dentro de su capacidad, para lograr el respeto progresivo de estos derechos” (Artículo 27.2 de la Constitución de Sudáfrica.) El reconocimiento del derecho impone ciertas obligaciones tanto al Estado como a los actores no estatales que los tribunales pueden hacer valer, como efectivamente ocurrió en el caso del Gobierno de la República de Sudáfrica vs Grootboom (2000), donde la sentencia de la Corte Constitucional estableció que se pueden hacer valer las obligaciones relacionadas a los derechos positivos sociales y económicos. El tribunal explicó que al cuestionar el fracaso del Estado en tomar medidas positivas suficientes, “la pregunta real será si las medidas legales u otras que toma el Estado son razonables”.

La cláusula más importante aquí es la que alude a lo “razonable” que sean las medidas del Estado, que incluye los roles y la capacidad de las diferentes esferas del gobierno así como también los recursos necesarios para garantizar que se puedan satisfacer los derechos al agua. Esta cláusula ha sido utilizada en la mayoría de los casos para justificar limitaciones al derecho al agua, así como para confirmar leyes que requieren que el precio del agua refleje los costos, lo que en efecto facilita la participación del sector privado en servicios relacionados con el agua y permite las desconexiones del servicio por falta de pago. Cualquier cumplimiento de “derechos” que a juicio de los tribunales debilite las estrategias macroeconómicas de competitividad internacional de Sudáfrica, o que obligue a los estamentos más bajos del gobierno a imponer aumentos en las tarifas que superen el máximo legal, son consideradas “irrazonables”.

Asimismo, la Constitución y otras leyes han sido utilizadas para defender la introducción e instalación de contadores de agua prepagos en zonas de bajos ingresos. El Estado sudafricano sostiene que los contadores prepagos “favorecen a los pobres”, y que les permite a los hogares calcular de mejor manera sus gastos de agua, mientras que al Estado le facilitan manejar el flujo de ingresos para poder invertir en la ampliación de los servicios a zonas que carecen de servicios o en donde no son suficientes. De manera semejante, se considera que los cortes de agua son constitucionales porque no pagar las facturas de servicio afecta negativamente el derecho al agua de otras personas.

El acceso al agua en Sudáfrica se ha visto por lo tanto mejorado por los derechos constitucionales, pero de ninguna manera está garantizado, ya que hay otras exigencias legislativas y macroeconómicas que definen qué medidas son “razonables” en materia de aplicación del derecho al agua.

Preguntas

Qué tipo de instituciones o mecanismos legales son necesarios para ayudar a garantizar el cumplimiento del acceso igualitario al agua incluido en la constitución nacional?

Cómo se puede ayudar a los ciudadanos que quieren presentar quejas y demandas formales frente a gobiernos que no cumplen con el espíritu de las leyes que pretenden garantizar el acceso al agua y la sustentabilidad del recurso?

Notas y enlaces

Ver el sitio web de *Water Dialogues*: www.waterdialogues.org/country-03.html,

Un documento de antecedentes presentado para el Informe de Desarrollo Humano de 2006 del PNUD sobre agua: http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2006/papers/muller_arnold.pdf ; y el Proyecto de Servicios Municipales: <http://www.queensu.ca/msp/>



Caso 4

Suministro de agua gratuita en Sudáfrica

Introducción

La idea de suministrar un “mínimo vital” gratuito de agua potable a los hogares más pobres es convincente, ya que incorpora el principio según el cual los usuarios de agua más ricos subsidian el consumo básico de los pobres. Sin embargo, en Sudáfrica, la definición restringida de ese mínimo vital ha significado un paso atrás al status quo que mantiene las desigualdades. Agravado por el problema de los contadores de agua prepagos y otros mecanismos de limitación, los sudafricanos más pobres siguen luchando.

En el proceso previo a las elecciones de gobiernos locales en Sudáfrica en el año 2000, el gobierno nacional anunció que habría una política de “acceso gratuito al agua” en Sudáfrica a partir del 2001, suministrada por las autoridades municipales y financiada parcialmente por el gobierno nacional. La cantidad asignada fue de 6.000 litros por hogar por mes, calculados en base a una estimación de 25 litros por persona por día en hogar de ocho personas.

Puesto que la mayor parte de las municipalidades no estaba preparada para ello (y tampoco fueron consultadas), pasaron varios años antes que esta política se aplicara ampliamente, y todavía hoy hay algunas municipalidades que sólo suministran agua gratuita de manera parcial. También hay millones de personas sin ningún tipo de acceso al agua que no se pueden beneficiar de la política, o que usan grifos comunales, lo que dificulta cumplir con la asignación de agua gratuita.

La política de agua gratuita es parte de una reestructuración mayor de las tarifas del agua en Sudáfrica, ostensiblemente diseñada para que el precio del agua sea más “progresivo”. De hecho, la asignación gratuita de agua es el primer “bloque” de precios, y si el consumo supera los 6000 litros de agua por mes se cobra sobre la base de otros bloques de tarifas ascendentes. Como indica el gráfico a continuación, la estructura escalonada de tarifas es gratis en el primer bloque y aumenta por bloques de consumo. Los bloques más altos de precios tienen como objetivo subsidiar el agua “gratuita”, y al mismo tiempo actúa como un incentivo para no malgastar el agua. (La línea A indica los costos marginales de producción).

Teóricamente, todos los hogares reciben un abastecimiento gratuito de agua vital, subsidiado por bloques de tarifas ascendentes que penalizan a los hogares más ricos y actúan como una herramienta de gestión y control de la demanda. En la práctica, se ha demostrado que el volumen de agua gratuita es inadecuado para la mayoría de los hogares de bajos ingresos, obligándolos a formar parte del segundo o tercer bloque de consumo, a menudo generando facturas de consumo de agua más altas que las que pagaban los hogares antes de la introducción del agua “gratuita”. Esto se debe en parte al gran aumento de las tarifas en el segundo y tercer bloque. En algunos casos, los hogares deben pagar por el bloque gratuito si consumen una gota más de los 6000 litros. Los hogares que no pueden pagarlo, se ven obligados a limitar su consumo a 6000 litros.

En la mayoría de los casos la asignación de agua gratuita ha sido universal –en gran parte porque se asume que el costo de evaluar la situación económica de cada hogar supera lo que se ahorraría en caso de excluir del suministro gratuito a quienes tienen poder adquisitivo suficiente para pagar- pero en algunas municipalidades se introdujeron políticas de indigencia que han redundado en decisiones políticas y sociales que escinden y enemistan a la comunidad al tratar de identificar cuáles hogares son “lo suficientemente pobres” para recibir agua gratuita.

En aquellos casos en que los hogares consumen más que la asignación gratuita de agua pero no pagan las cantidades usadas por encima de ese umbral, las municipalidades introdujeron dispositivos para detener el flujo de agua en 6000 litros o limitar el flujo diario de agua para que sea imposible usar más de 6000 litros por mes, o simplemente cortan el abastecimiento de agua.

Debido a las consecuencias políticas asociadas a los cortes y dispositivos de limitación, muchas municipalidades han estado introduciendo contadores de agua prepagos que suministran la asignación gratuita de agua pero detienen el flujo si el agua no se compra previamente, trasladando así de hecho el acto de la desconexión del servicio a los propios hogares.

En conclusión, aunque se aproxima al concepto de Bienes Comunes al proveerle a muchos hogares en Sudáfrica abastecimiento vital de agua, el agua gratuita debe ser vista como parte de un paquete mayor de mercantilización del agua, que incluye la introducción de despiadados sistemas de aplicación y recuperación de costos que siguen tendiendo a beneficiar a los hogares de altos ingresos y la industria a costa de los hogares de bajos ingresos.

Preguntas

Qué formas de consulta y gestión participativa pueden garantizar que los sistemas de precios “progresivos” o escalonados sean realmente progresistas?

Debería acaso el movimiento de justicia por el agua incorporar alguna forma de recuperación de costos? Si es así, ¿cómo podríamos utilizar los subsidios cruzados para gravar a los consumidores más grandes, evitar seguir excluyendo a los pobres, y evitar seguir fortaleciendo los privilegios de las elites y las empresas?

Cómo luchamos contra la mercantilización del agua para que no se la considere simplemente como un producto más que se compra y se vende?

Cómo le garantizamos a la naturaleza la cantidad y calidad de agua necesarias para la supervivencia de los ecosistemas?

Notas y enlaces

Ver The Struggle Against Water Privatization in South Africa, escrito por Dale McKinley:

www.tni.org/books/watersafrica.pdf; y “Reclaiming Water Prices for Participatory Public Services, de Patrick Bond:

www.waterjustice.org/uploads/attachments/pdf68.pdf



Caso 5

'Control Social' y asociaciones públicas/colectivas con sistemas comunitarios en Cochabamba, Bolivia

Introducción

En abril de 2000, miles de ciudadanos de Cochabamba, la tercera ciudad más grande de Bolivia, bloquearon las rutas para protestar contra la privatización del sistema local de abastecimiento de agua potable de la ciudad, aglutinados tras la consigna central de “¡El agua es vida!”. El gobierno canceló el contrato de concesión y le devolvió al municipio el control del sistema de abastecimiento, esta vez bajo la mirada atenta de la Coordinadora por la Defensa del Agua y la Vida, la organización del movimiento social que surgió para coordinar las protestas. Los dirigentes de las comunidades se abocaron a la tarea de elaborar una nueva manera de proveer agua, fundada en las experiencias con formas no jerárquicas de toma de decisiones que surgieron durante lo que se describió a menudo como la “Guerra del Agua”. Una cosa estaba clara: si bien la privatización no era la respuesta, nadie quería volver al modelo anterior de empresa “pública”, considerada ampliamente como ineficiente y corrupta.

En respuesta a las experiencias previas de nacionalización en la historia de Bolivia, los activistas que luchan en pos de la justicia en torno al agua en Bolivia insisten que las modalidades públicas (léase estatales) de gestión no son una verdadera alternativa a la privatización porque simplemente reemplazan una forma de manejo jerárquico con otra. Como alternativa a la privatización proponen la “re-apropiación social de la riqueza”, que implica la colectivización de la propiedad y la auto-organización de los usuarios de agua. Como explica Oscar Olivera, portavoz de la Coalición en Defensa del Agua y la Vida, conocida como La Coordinadora, esta diferencia entre los activistas del movimiento de justicia por el agua en Bolivia y en el resto del mundo es crucial: “Los activistas en el Norte tienden a centrar su atención en cuestiones relacionadas a la gestión, mientras que nosotros (en Bolivia) nos centramos principalmente en la lucha por los derechos de propiedad”.¹

Las nociones de propiedad colectiva que surgieron de la lucha por el agua están inspiradas en las experiencias de gestión comunitaria del agua de dos participantes claves en la guerra del agua de Cochabamba: las asociaciones de pequeños campesinos regantes (ver sección de “usos y costumbres”), y los sistemas comunitarios de abastecimiento de agua. Completamente dejadas de lado por las autoridades estatales y sin servicios básicos, la mayoría de las comunidades en los barrios pobres de la zona sur de la ciudad de Cochabamba han construido sus propios sistemas autónomos abastecidos por pozos subterráneos y gestionados por cooperativas autónomas, comités informales o consejos vecinales elegidos por los habitantes. Desde 2004, muchos de estos sistemas comunitarios de agua se han organizado en la Asociación de Sistemas Comunitarios de Agua del Sur (ASICA-Sur), que les ha dado una voz colectiva a los ciudadanos que carecen de servicios públicos de agua. Más recientemente, ASICA-Sur ha recibido financiamiento de la Unión Europea para construir sistemas independientes de abastecimiento de agua en los distritos 7 y 14. Estos sistemas independientes compran agua al por mayor a la empresa pública de agua, pero están gestionados por los usuarios. Como explica el Presidente de ASICA-Sur, Abraham Grendydier, a la empresa pública de agua le llevó demasiado tiempo responder a sus pedidos, así que decidieron tomar las cosas en sus propias manos.² Aunque la construcción de sistemas de abastecimiento de agua independientes conlleva el riesgo de fracturar aun más la red urbana de agua, a largo plazo puede ser la única manera de satisfacer la meta de “agua para todos”.

Las reivindicaciones de propiedad y gestión comunal también se han traducido en el reclamo por “control social” dentro de la empresa de agua re-municipalizada, SEMAPA. Las juntas directivas anteriores estaban conformadas exclusivamente por profesionales y políticos, pero entre abril de 2002 y octubre de 2005, tres de los siete directivos fueron miembros elegidos de los macro distritos de la ciudad. No obstante, muchos de los problemas que históricamente han afectado a la empresa pública de agua permanecen sin resolver debido al grado limitado de control social. Aunque la empresa pública de agua ha tenido efectivamente un mejor desempeño que el que podría esperarse de una empresa privada, las tasas de cobertura siguen siendo bajas (46% en 2005), y los servicios son intermitentes. Hay distintas opiniones sobre las razones del fracaso del control social como medida para mejorar el desempeño de la empresa pública y los servicios básicos. Para algunos, se explica por el hecho que es el alcalde quien controla el presupuesto. Otros destacan la falta de preparación y capacidad de los directores ciudadanos,

la sobre-politización de la empresa pública, o los problemas de corrupción. Otros más ponen la culpa en las condiciones que impuso el Banco Interamericano de Desarrollo para liberar un préstamo, que bloquearon efectivamente los intentos de democratizar el servicio porque obligaban a priorizar las reformas administrativas y las reparaciones de la red existente en lugar de hacer mejoras visibles en los servicios de abastecimiento de agua potable. Sin embargo, casi todos concuerdan en que los problemas de agua de Cochabamba están asociados a la falta de inversión pública. Los esfuerzos en pos de alternativas y las iniciativas de debate sobre el futuro de la empresa local de agua pública continúan.

Preguntas

Si un problema central de la SEMAPA hoy es el financiamiento, qué tipos de soluciones a este problema podemos imaginar e implementar?

Cuáles son algunas alternativas a los préstamos de las instituciones financieras internacionales, cuyas condiciones continúan retrasando cualquier avance?

Si el concepto de “bienes o ámbitos comunes” está asociado a la democracia, cómo definimos “gestión democrática” en el contexto de una empresa pública de agua?

Notas y enlaces

Democracy Center: www.democracyctr.org/index.php

Agua Tuya, a collaboration between SEMAPA, community-based water committees, and NGOs:
www.aguatuya.com/html/water_for_all.html

On Bolivia's water wars, see www.upsidedownworld.org/main/content/view/1255/31/



Caso 6

Pequeños agricultores y el concepto indígena de “Usos y Costumbres”

Introducción

El concepto de “usos y costumbres” se usa ampliamente para describir los sistemas de gobernanza indígena. En este caso, se refiere a los derechos tradicionales al agua y las prácticas de las comunidades indígenas Quechua en los Andes, siendo el Valle de Cochabamba en Bolivia el lugar donde más se ha desarrollado este concepto. En el Valle de Cochabamba la producción agrícola depende del riego, una tecnología introducida por los Incas en los valles fértiles de los Andes hace más de quinientos años. En estas comunidades, los recursos hídricos están manejados colectivamente por asociaciones de pequeños agricultores. Hay líderes locales conocidos como ‘jueces de agua’ que se encargan de distribuir el agua a cada hogar en base a una rotación fundada en varios criterios, entre ellos la contribución con servicios a la comunidad y participación en la organización.

En Bolivia, la noción de “usos y costumbres” se politizó bajo la amenaza de las privatizaciones. Una de las razones por las cuales la privatización del agua en Cochabamba provocó una “guerra del agua” fue debido a la resistencia que habían opuesto previamente las organizaciones de pequeños agricultores que dependen del riego, que percibieron que las cláusulas monopólicas de la ley de privatización del agua aprobada por el gobierno boliviano (ley 2066) amenazaban sus derechos tradicionales al agua. Unos años antes que se aprobara esa ley, esas organizaciones se habían asociado en la poderosa Federación Departamental Cochabambina de Regantes (FEDECOR). Miles de miembros de FEDECOR se sumaron a las protestas urbanas para pedir la modificación de la nueva ley del agua y que se reconocieran sus “usos y costumbres”.

En octubre de 2004 el gobierno boliviano aprobó una nueva ley de riego (Ley 2878), que se redactó con la participación de FEDECOR. Esta ley innovadora les otorga a las comunidades indígenas y a los pequeños agricultores y propietarios de tierras el derecho a continuar ejerciendo sus “usos tradicionales” de las fuentes de agua (pozos, represas, ríos y agua pluvial), protegiéndolos de ataques futuros de manos de las empresas transnacionales y empresarios privados. La ley prohíbe la comercialización de los recursos hídricos proscribiendo la creación de mercados de derechos al agua (como ocurrió en Chile); reconoce los derechos colectivos tradicionales de los pequeños agricultores campesinos y sus familias a las fuentes de agua (no en términos de derechos de propiedad, sino como derecho de acceso); y organiza el sector de aguas rurales sobre la base de límites territoriales tradicionales. Es importante destacar que la ley también creó una nueva autoridad con jurisdicción sobre el agua llamada el Servicio Nacional de Riego (SENAR), que estipula la participación de los pequeños agricultores y las organizaciones campesinas más importantes y les asigna tareas de supervisión.

Las reglamentaciones de esa ley, que la hicieron aplicable, se aprobaron bajo el gobierno de Morales en octubre de 2006. Los investigadores están elaborando actualmente procedimientos para identificar y registrar derechos legales al agua. Mediante sistemas de información geográfica de última generación y encuestas antropológicas, el Ministerio está generando una base de datos común que representará un registro de los derechos tradicionales al agua, y que ayudará a eliminar futuros conflictos por el agua y garantizar que los pueblos indígenas, campesinos y pequeños agricultores puedan ejercer su derecho ancestral de uso del recurso.

La nueva ley no ha sido inmune a las críticas. Tal y como sostienen las investigadoras Nancy Yañez y Susan Poats, “el concepto de ‘igualdad’ sobre el cual se erige el sistema comunal de derechos al agua no significa ‘equidad’”. Las decisiones en torno a cuál familia recibe cuánta agua y cuándo, están sujetas a criterios altamente políticos y subjetivos. También se han planteado preocupaciones porque bien podría ocurrir que la creación de un registro de agua consagre los derechos de comunidades relativamente privilegiadas que ya tienen acceso al agua, mientras que las comunidades más pobres quedan excluidas del sistema sobre la base de los “usos y costumbres”. El modelo de los “usos y costumbres” representa por lo tanto algunas de las complicadas dinámicas de poder social asociadas a las definiciones de comunidad y control comunal o comunitario.

Preguntas

Cómo podemos garantizar que las formas de “control comunitario” sean plenamente democráticas y no perpetúen las desigualdades existentes?

Qué papel pueden jugar nuestros compañeros del movimiento por el acceso al agua en el Norte en la superación de los riesgos potenciales mencionados en la primera pregunta?

Existe acaso algún papel que ellos puedan jugar?

Notas y enlaces

Ver el artículo de Yañez y Poats: *Derechos de agua y gestión ciudadana*: www.idrc.ca/uploads/user-S/11976606153Libro_3_Derechos_de_agua_y_gestion_ciudadana_Nancy_Yanez_Susan_Poats_Junio_2007.pdf; y el de Carmen Peredo: *The Struggle for Water as a Common Good: The Experience of Andean Communities in Bolivia* en: www.indiana.edu/~iascp/bali/papers/Villarroel_Elena.pdf



Caso 7

La 'acequia' como sistema de riego y gestión del agua

Introducción

Las prácticas indígenas de manejo y gestión del agua están arraigadas en siglos —cuando no milenios— de conocimiento compartido y conservado y una cultura adaptada a condiciones climáticas específicas. A menudo, dichos sistemas reflejan nociones del agua completamente diferentes a aquellas reflejadas en las culturas del Norte con economías capitalistas.

En toda la región andina de América del Sur, pasando por América Central y hasta el sudoeste de Estados Unidos, se viene practicando desde hace siglos un sistema de control y manejo comunitario de los sistemas de riego conocido como “acequias”, originalmente importado de España, donde a su vez se lo adaptó de tradiciones ancestrales del África y Oriente Medio, y cuyos orígenes parecen remontarse a antiguas prácticas ibéricas y romanas. Como sistema de control y responsabilidad colectiva por los sistemas de riego en tierras secas y regiones desérticas, las acequias se adaptaron para uso de las comunidades indígenas y es un ejemplo de una forma de gestión comunitaria de los recursos hídricos para la agricultura y el sustento.

Las acequias implican derechos y responsabilidades cuidadosamente contruidos para aquellos que son parte del sistema de gestión de propiedad común que incluye todos los aspectos asociados al desvío, asignación y uso, así como la reutilización y recarga de los recursos hídricos (Brown y Rivera, 2000). Rutgerd Boelens explica que en la región andina, la noción del derecho al agua va más allá de los términos definidos de acceso y uso hasta abarcar incluso el derecho al control democrático de la gestión de los recursos hídricos (Boelens, 2006). En los Andes, por ejemplo, los pueblos indígenas utilizan los sistemas de riego colectivamente controlados como cimiento del papel dominante que desempeñan en la producción agrícola para satisfacer las necesidades de seguridad alimentaria nacional, al mismo tiempo que son constantemente los miembros más marginados y empobrecidos de las sociedades andinas. En este contexto, y en todos los ámbitos donde aun existen dichos sistemas de riego, los derechos de los pueblos indígenas a controlar el agua para el bien público están permanentemente amenazados por otros imperativos jurídicos sobre el agua que no respetan su uso sustentable ni la autonomía cultural y los sistemas legales indígenas.

En Nuevo México (EEUU), donde la legislación estadual protege las acequias y los derechos de sus usuarios como una prioridad fundada en el principio de que “los primeros que llegan son los primeros que usan”, algunos casos no resueltos de asignación de derechos estaduales sobre el agua han puesto de relieve las tensiones entre los derechos de los colonos y los derechos de los indígenas al agua. Los campesinos de habla hispana enfrentan barreras idiomáticas a la hora de presentar o encarar quejas formales debido al predominio del idioma inglés en el sistema jurídico a través del cual deben litigar sus casos, al mismo tiempo que hacen frente a la marginación y exclusión social a la que están sometidos, una tendencia que ha sido documentada por los trabajadores de los servicios de asesoría legal de la región. (Meinzen-Dick & Pradhan, 2005).

Las Asociaciones de Acequias de Nuevo México enfrentan además otras tensiones, como queda reflejado en los casos recientes que contraponen a esa tradición legal con el ordenamiento jurídico estadual y nacional. Una ley estadual de 2003 le dio a las Asociaciones de Acequias de Nuevo México el derecho a denegar solicitudes de transferencias de agua de sus miembros. En un caso presentado ante una corte de distrito en septiembre de 2007, dos abogados de diferentes demandantes argumentaron que esa ley estadual viola la constitución de Estados Unidos, suponiendo que así podrían abatir dicha ley y obligar a las Asociaciones de Acequias a violar sus propias normas al verse inhabilitadas para frenar las transferencias de agua de los canales de riego bajo su control. En uno de los casos, el demandante quería desviar el agua para una nueva zona residencial cerca de Española. En el otro caso, 49 miembros de la asociación local de Acequias que controla la Acequia del Gavilán decidieron en contra de la transferencia de agua, que sólo contaba con el apoyo de un miembro, el demandante, quien ahora pretende anular la autoridad de la asociación en los tribunales. El demandante, que preferiría que en lugar de las asociaciones de acequia fuese un ingeniero del estado quien tuviera la autoridad para decidir sobre las transferencias de agua, argumenta que el agua está sujeta a derechos de propiedad como establece la constitución. Paula García, de la Asociación de Acequias de Nuevo México observó

que la capacidad de las asociaciones para proteger sus derechos sobre el agua estaba en juego en las deliberaciones en torno a esa ley de 2003.

En este sentido, uno de los problemas principales que afecta a los sistemas de riego por acequia que siguen funcionando en América Latina y el sudoeste de Estados Unidos es la tensión continua que existe entre los derechos contemporáneos de propiedad privada individual y su noción del derecho al agua, y los antiguos derechos de propiedad común encarnados en el modelo de control comunitario de las acequias.

Preguntas

Debería el agua ser considerada propiedad común o propiedad privada?

Cuál es la diferencia?

Cómo pueden las alternativas locales encarar el tema de los derechos al agua inequitativos –ya sea entre usuarios individuales; o entre usuarios individuales, agencias gubernamentales y empresas?

Notas y enlaces

Además de las referencias citadas, visitar el sitio web del Acequia Institute (enfocado principalmente en el sudoeste estadounidense): www.acequiaiainstitute.org/, así como el sitio web del programa WALIR (Water Law and Indigenous Rights) de la CEPAL sobre derechos indígenas y legislación del agua: www.eclac.org/DRNI/proyectos/walir/. Hay un artículo excelente y detallado sobre la tradición de las acequias en Nuevo México específicamente: ver *Acequias de Común –The Tension between Collective Action and Private Property Rights (Acequias de Común –La tensión entre la acción colectiva y los derechos de propiedad privada)* de John Brown y José A Rivera, disponible en: <http://dlc.dlib.indiana.edu/archive/00000227/00/rivieraj041300.pdf>. Visitar también el sitio web de la Asociación de Acequias de Nuevo México: www.lasacequias.org



Caso 8

Las luchas de los pueblos indígenas por el agua en Ecuador: el caso de Licto

Introducción

La marginación y las inequidades arraigadas afectan a los pueblos indígenas en todo el mundo. En Ecuador, como en otras partes, la desigualdad tiene connotaciones raciales. En ese contexto, los pueblos indígenas locales han luchado para incidir y tomar control de los recursos hídricos para el riego.

Rutgerd Boelens destaca el caso de Licto, una zona en la provincia andina de Chimborazo en Ecuador, para ilustrar el poder que pueden tener las comunidades indígenas cuando trabajan de manera solidaria para llevar a cabo sus propias prioridades y sistemas de gestión de agua para el riego. Licto tiene una población de aproximadamente 13.000 personas, de las cuales el 90% son indígenas, representadas en 28 comunidades rurales. Los blancos y mestizos, más privilegiados, constituyen la gran mayoría en la ciudad de Licto en sí. Boelens caracteriza la historia de las relaciones sociales y de poder entre los grupos blancos y mestizos con poder y las comunidades indígenas aledañas como relaciones de comercio basadas en la explotación, expropiación de la tierra y discriminación (Boelens, 2002). Las mujeres hacen la mayor parte del trabajo de riego en condiciones ecológicas desafiantes, en las laderas empinadas y erosionables de sus minifundios, para su subsistencia y el comercio local.

En 1989, se invitó a la Corporación de Organizaciones Campesinas de Licto (CODOCAL) a participar en un plan “de desarrollo rural integrado” para el riego, supervisado por el Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos (INERHI). En respuesta, las personas más pobres de la sociedad en las comunidades indígenas rurales decidieron rechazar la invitación y construir su propio futuro en términos de gestión del agua. El gobierno, de su parte, ofreció a través del INERHI un plan tecnócrata y autoritario para las obras de riego en la región, que dividía la responsabilidad de implementación del plan entre CODOCAL y una ONG, la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA).

Sin embargo, el plan técnico inicial ofrecido por el gobierno reforzó la desigualdad de derechos que beneficiaba a los ricos de Licto. También hacía caso omiso de las preocupaciones válidas de las mujeres –la mano de obra principal en el riego– al establecer planes de trabajo de riego nocturno, cuando las mujeres indígenas son más vulnerables a la persistente violencia sexual. Perpetuando un sistema que ya era inequitativo, el plan del INERHI implicaría que quienes tuvieran más tierras en su propiedad se beneficiarían desproporcionadamente de una mayor parte de la inversión y más derechos al agua. El plan también incluía una tarifa única para el servicio de agua potable que no respetaba los sistemas indígenas existentes de reglas para el acceso al agua, basado en el trabajo de los usuarios y su participación en las organizaciones dedicadas al riego y al manejo del agua.

Como respuesta, CODOCAL impulsó la creación de un organismo de gestión del riego (el Directorio de Riego) que representara los intereses de las comunidades indígenas rurales, y que atrajo eventualmente la solidaridad de los residentes más pobres de la ciudad de Licto. A pesar de la resistencia del gobierno a la contrapropuesta de CODOCAL, el Directorio de Riego se constituyó legalmente como el organismo representante de los pobres y marginados en sus esfuerzos por asegurarse el derecho a gestionar su propia agua para el riego. CODOCAL ha trabajado efectivamente para dictar los términos de la participación indígena en la gestión del riego, incluyendo estructuras para la gestión participativa y responsabilidades definidas para las contribuciones de los usuarios en cuanto al trabajo y mantenimiento, así como el uso sustentable del agua para los indígenas y los pobres.

Boelens comenta que “en Licto [la estrategia de gestión del riego indígena] constituye una herramienta fundamental en manos de las comunidades para desafiar el poder y la gestión estatal del sistema, y también constituye una pieza clave de la organización campesina e indígena para su liberación de la dominación histórica ejercida por las familias blancas y mestizas de la ciudad”.

Preguntas

Cómo podemos hacer que los proyectos públicos relacionados con el agua pongan atención a las desigualdades e injusticias por razones de género, posición económica, y raza o etnia?

Cómo pueden trabajar los proyectos de gestión colectiva del agua para promover la solidaridad entre culturas, géneros y clases?

La noción de los bienes comunes es inherentemente específica a una cultura o a una región geográfica?

Cómo podrían aplicarse las nociones de los bienes comunes provenientes de contextos como las comunidades rurales e indígenas de los Andes en contextos urbanos de países industrializados y avanzados?

Notas y enlaces

Ver el sitio web del proyecto WALIR (*Water Law and Indigenous Rights*) en <http://www.eclac.org/DRNI/proyectos/walir/>, y el artículo de 2005 de Boelens sobre los proyectos indígenas de riego en Licto, en <http://www.iapad.org/publications/ppgis/BoelensLicto3DWaterRights.pdf>, así como también el libro escrito por Boelens y Hoogendam “*Water Rights and Empowerment*” (Assen: Van Gorcum, 2000).



Caso 9

La lucha de las naciones originarias por el agua: Los casos de los pueblos Black Mesa y St'at'imc

Introducción

Las culturas originarias/aborígenes del mundo enfrentan múltiples desafíos en su lucha para poner en práctica sus propios planes de gestión del agua. A menudo se ponen en juego concepciones y sistemas de “desarrollo” contrarios entre sí, y los Estados colonizadores hacen caso omiso o anulan los derechos y la autonomía de las culturas indígenas.

Dos ejemplos provenientes de la Isla Tortuga (o América del Norte para los colonizadores) ilustran fielmente las iniciativas de las naciones originarias para tomar el control de la gestión del agua a la luz de la explotación del agua en manos del estado o empresas privadas. Dentro del estado de California en Estados Unidos, las naciones originarias Navajo y Hopi han llevado a cabo una lucha para evitar que la empresa Peabody Energy Corporation siga abusando de sus recursos hídricos utilizándolos para la minería de carbón en Black Mesa, que es su territorio y hogar. El punto en cuestión son las extracciones insustentables de agua de los principales acuíferos que datan de la Era del Hielo, que llevó a cabo Peabody desde 1970 hasta el 2005 a razón de 3,3 millones de litros diarios. Además, malas decisiones de ingeniería tomadas por las autoridades estatales llevaron a drenar y llevar agua contaminada con uranio de un acuífero a otro usado para el agua potable. A pesar que las extracciones fueron frenadas en 2005, la compañía ha intentado reiteradamente obtener un nuevo permiso para reanudar su actividad minera, y aunque la fundación Black Mesa Trust que representa los intereses de las naciones originarias y la sustentabilidad ecológica continúa su trabajo, la amenaza de retorno a la situación anterior al 2005 es permanente. Para quienes participan en la fundación, el derecho de las naciones originarias a gestionar su propia agua es una obligación sagrada de su pueblo y su cultura.

Entretanto, en el territorio St'at'imc dentro de la provincia canadiense de Columbia Británica, el consejo de jefes está trabajando para implementar un plan general de gestión del agua basado en la sustentabilidad ecológica. La vía principal para lograrlo ha sido declarar todo su territorio como “área cultural protegida”. Incorporando elementos de la ciencia occidental con las tradiciones y el conocimiento indígena, el pueblo St'at'imc intenta desarrollar un sistema integrado de protección del ecosistema que valore toda la diversidad de la vida y la tierra, considerando al oso pardo, los ungulados y los peces como “especies indicadoras” clave, con el objetivo de proteger las cuencas y cursos de agua vitales.

El gobierno de Columbia Británica, sin embargo, se ha negado repetidamente a negociar con el pueblo St'at'imc y honrar sus planes para la gestión de la tierra y el agua, debido al miedo de debilitar aún más el crecimiento de una cuestionada industria forestal. Actualmente no es necesario obtener autorización de la comunidad para construir (léase: explotar el agua y los bosques) en tierra aborígen.

Por eso, los intereses privados siguen apoderándose rápidamente de las licencias para el uso de la tierra y el agua, a menudo sin cumplir siquiera con la condición de llevar a cabo una evaluación de impacto ambiental provincial. Esta situación se asemeja bastante a los problemas que enfrentan las naciones originarias en Alberta que están oponiendo resistencia y cuestionando el crecimiento ilimitado de los proyectos para producir petróleo derivado de arenas bituminosas, que implican graves riesgos debido a la gran explotación del agua y las cuencas hidrográficas del norte de Alberta (una unidad de petróleo producido de esta manera requiere tres unidades de agua).

Preguntas

Dado el desequilibrio de poder, cómo podría la solidaridad internacional y multisectorial reforzar la reivindicación de autogobierno y autodeterminación real de las comunidades indígenas?

Deberíamos acaso preocuparnos de manera fundamental por otras formas de vida en las alternativas locales que planteamos para el agua?

Si es así, de qué modo podemos incorporar esa preocupación?

Notas y enlaces

Sitio web de la fundación Black Mesa Trust: <http://www.blackmesatrust.org/>

Sitio web de St'at'imc: <http://www.statimc.net/>.

Para más información sobre el impacto de la explotación de las arenas bituminosas, ver el sitio web del observatorio de las arenas bituminosas del Polaris Institute, en <http://www.tarsandswatch.org/tags/water-depletion> y el sitio web del observatorio de las arenas alquitranadas del Pembina Institute, en <http://www.oilsandswatch.org/>



Caso 10

Gestión pública del agua en Porto Alegre, Brasil

Introducción

Porto Alegre ha servido de inspiración para el mundo de muchas maneras, como taller para la democracia participativa y asimismo como hogar del primer Foro Social Mundial. Su empresa pública de abastecimiento de agua potable ofrece un ejemplo innovador y exitoso de gestión participativa, que a pesar de enfrentar el desafío de carecer de acceso adecuado a financiación más allá de su estructura de tarifas, continúa funcionando con buen desempeño.

En Porto Alegre, Brasil, una de las empresas municipales de agua más famosas, duraderas y exitosas continúa prosperando y superando obstáculos. El Departamento Municipal de Agua y Alcantarillado (DMAE) descansa sobre un consejo deliberativo integral que le permite a los ciudadanos incidir y participar en el funcionamiento de su propio sistema público de abastecimiento de agua, inclusive mediante un proceso de “auditoría social” que implica el control y la participación ciudadana en la elaboración del presupuesto de obras asociadas al servicio. El sistema está dotado de un mecanismo de elaboración participativa del presupuesto, a través del cual se le consulta a 16 regiones, se vota y se recogen los aportes en términos de áreas donde es necesario hacer mejoras o ampliar los servicios. Estas ideas se estudian para verificar su viabilidad antes de integrarse al presupuesto del año siguiente. También le subcontratan algunos servicios y procesos al sector privado.

Hélio Maltz destaca que, antes de 1989, el DMAE prestaba servicios principalmente en el centro y las zonas de mayor poder adquisitivo de la ciudad, pero con el advenimiento de estructuras de gobierno y elaboración del presupuesto mucho más participativas, se han logrado grandes mejoras y ampliaciones del servicio. Mientras que el crecimiento demográfico de la ciudad entre 1994 y 2004 fue del 8,5%, el DMAE supervisó una expansión de las conexiones de agua domiciliar que registró un índice de 23 % durante ese período, además de un aumento del 40% en la cantidad de hogares conectados al servicio de saneamiento. Las enfermedades transmitidas por el agua han disminuido sustancialmente en la ciudad como resultado, haciendo de Porto Alegre una ciudad resistente a las epidemias nacionales de cólera recientes.

Aunque el 99% de los ciudadanos recibe agua potable, el sistema de alcantarillado y saneamiento requiere grandes inversiones. El servicio existente de aguas residuales cubre solo el 27% del volumen total. Es claro que el acceso a financiación de largo plazo es crucial para complementar la autosuficiencia financiera del servicio en sí (la ONG británica World Development Movement sostiene que a pesar de la cifra increíble de 27 millones de dólares que invirtió la DMAE para mantenimiento y ampliación, sería necesario invertir unos 200 millones más para llevar a cabo una ampliación franca y adecuada del saneamiento y alcantarillado). Maltz concluye que a pesar de la presión exitosa del Banco Interamericano de Desarrollo que condujo a la privatización de las empresas públicas de abastecimiento de agua potable en otras ciudades brasileñas, la persistencia del DMAE consiguió frenar esa tendencia. El DMAE ofició como eje y soporte para la resistencia y el desarrollo de alternativas cuando en 2000 se quiso aprobar una ley para reforzar la privatización del agua.

Uno de los instrumentos poderosos con que cuenta el DMAE es los “subsidiados cruzados” en las tarifas del agua. Los ciudadanos de bajos ingresos tienen derecho a diez metros cúbicos de agua por mes, pero sólo pagan cuatro, y las tarifas aumentan considerablemente para aquellos que usan entre 20 y 1000 metros cúbicos por mes. Esta “tarifa social” se traduce en un sistema donde los más ricos ayudan a subsidiar la reinversión del dinero de las tarifas en mejoras para el sistema mismo: el 70 por ciento de dichas mejoras son financiadas a través de las tarifas de servicio. El DMAE también ha trabajado para ampliar las oportunidades educativas de sus empleados.

Preguntas

Cómo se puede fortalecer la democracia y la gestión participativa en las empresas públicas de abastecimiento de agua tanto en el Norte como en el Sur?

Deberían las empresas públicas de abastecimiento de agua “subcontratarle” acaso parte de sus servicios a empresas privadas?

Cómo pueden las empresas públicas invertir adecuadamente en infraestructura sin tener que recurrir a la privatización?

Notas y enlaces

Ver el capítulo de Maltz en 'Por un modelo público de agua: triunfos, luchas y sueños', titulado 'El agua en Porto Alegre: un bien público y universal.'

Además ver el capítulo sobre Brasil en Going Public: Southern solutions to the global water crisis, del World Development Movement.



Caso 11

Asociaciones entre organismos públicos relacionados con el agua

Introducción

Una asociación entre organismos públicos (PUP) es un acuerdo en torno a objetivos explícitos sin fines de lucro, cuyo propósito es mejorar los servicios públicos de agua en una o más de las regiones asociadas. Por definición, estas asociaciones sólo pueden incluir socios del ámbito público (aunque esto ha sido cuestionado con la introducción de las “Asociaciones de Operadores de Agua”, como se amplía a continuación). El concepto mismo de las PUP surgió oficialmente a principios de la presente década como una alternativa posible a las asociaciones entre organismos públicos y privados (P3 o PPP), aunque la idea de la colaboración entre organismos públicos tiene una historia mucho más larga. Desde entonces, el interés en las PUP en torno al agua ha crecido significativamente, en general como resultado del trabajo de investigación llevado a cabo por la Unidad Internacional de Investigación de Servicios Públicos (UIISP).

Una asociación entre organismos públicos (PUP, por su sigla en inglés) es un acuerdo en torno a objetivos explícitos sin fines de lucro, cuyo propósito es mejorar los servicios públicos de agua en una o más de las regiones asociadas. Por definición, estas asociaciones sólo pueden incluir socios del ámbito público (aunque esto ha sido cuestionado con la introducción de las “Asociaciones de Operadores de Agua”, como se amplía a continuación). El concepto mismo de las PUP surgió oficialmente a principios de la presente década como una alternativa posible a las asociaciones entre organismos públicos y privados (abreviadas como PPP o P3 en inglés), aunque la idea de la colaboración entre organismos públicos tiene una historia mucho más larga. Desde entonces, el interés en las PUP en torno al agua ha crecido significativamente, en general como resultado del trabajo de investigación llevado a cabo por la Unidad Internacional de Investigación de Servicios Públicos (UIISP).

Las PUP pueden tipificarse según los tipos de acuerdo de que se trate. Es decir, se dice que los agentes de las PUP son del ámbito “público”, pero eso significa simplemente que son organismos sin fines de lucro y que no pertenecen al sector privado. Una PUP no tiene que establecerse necesariamente entre autoridades públicas gubernamentales, tales como dos empresas municipales de agua, por ejemplo; también puede incluir organizaciones comunitarias, sindicatos de trabajadores del sector público, y organizaciones no gubernamentales (ONG).

La segunda manera de tipificar las PUP es según sus objetivos. Los socios se juntan para lograr una amplia gama de metas, y estas se agrupan en un par de propósitos generales en la tabla que sigue:

Propósitos Generales	Objetivos específicos
Infraestructura	<ul style="list-style-type: none">• Ampliar la infraestructura• Conseguir que los servicios sean más eficientes y equitativos
Formación	<ul style="list-style-type: none">• Desarrollar el conocimiento y la confianza entre los trabajadores• Mejorar los sistemas administrativos
Financiamiento	<ul style="list-style-type: none">• Mejorar el establecimiento de tarifas sociales• Desarrollar mecanismos alternativos de financiamiento
Motivos políticos	<ul style="list-style-type: none">• Empoderar al operador público y protegerlo contra la privatización• Lograr que los servicios públicos sean más democráticos

La gran variedad de tipos de acuerdo y objetivos de asociación convierten a las PUP en una alternativa flexible y poderosa frente a la privatización. Los operadores públicos asociados pueden establecer un intercambio de conocimiento que desarrolle la pericia técnica y mejore a su vez la calidad y eficiencia del servicio. Las asociaciones Sur-Sur pueden ayudar a potenciar la ampliación de la infraestructura en áreas que actualmente no cuentan con servicios, estableciendo lazos entre municipalidades que ya resolvieron esos desafíos y aquellas que siguen bregando. La inclusión de agentes como las organizaciones

comunitarias y los sindicatos de trabajadores puede contribuir a que los servicios se democratizen más. Dar una voz más fuerte a las millones de personas que hoy en día no tienen acceso seguro al agua puede estimular a los gobiernos a ampliar los servicios.

Los críticos de las asociaciones entre organismos públicos señalan que no son una panacea para los problemas que enfrentan los servicios urbanos de abastecimiento de agua. En primer lugar está la cuestión del financiamiento. Mientras que las asociaciones entre el Norte y el Sur pueden financiarse por el país con altos ingresos, las asociaciones Sur-Sur pueden tener problemas para financiar los viajes del personal requerido entre los países. La coordinación también es un tema; la mayoría de las empresas municipales funcionan aisladas la una de la otra, haciendo difícil encontrar un socio adecuado. Para que las asociaciones ocurran a escala mundial, se debe desarrollar un mecanismo internacional de articulación.

Un organismo que apoya actualmente la búsqueda de esas articulaciones es la Junta Consultiva sobre Agua y Saneamiento del Secretario General de las Naciones Unidas (UNSGAB, por su sigla en inglés). Sin embargo, la UNSGAB tomó la idea de las PUP y la convirtió en “Asociaciones de Operadores de Agua” (WOP, por su sigla en inglés). El aspecto más problemático de las WOP es que explícitamente permiten socios del sector privado, aunque todos los agentes involucrados deben trabajar sin fines de lucro. Además de negar la meta política de las PUP de protección contra la privatización de los servicios públicos, las WOP pueden conducir a un debilitamiento de la concepción progresista-alternativa inicial de las PUP.

Un desafío final de las PUP es su habilidad para resistir la comercialización y corporativización de las empresas de servicios del sector público. Administrar una empresa pública de agua como si fuera una empresa privada, incluso aunque siga siendo de propiedad estatal, puede poner en riesgo los beneficios potenciales de las asociaciones entre organismos públicos.

Como conclusión, las PUP pueden percibirse como un avance con respecto de las PPP, pero si la meta es abastecer agua para todos, es indispensable discutir más en profundidad qué significa lo “público” y será necesario encontrar formas de proveer agua de manera equitativa, socialmente justa y sustentable

Preguntas

Cómo podemos trabajar para promover las PUP de manera eficaz entre los formuladores de políticas y los gobiernos?

Cómo pueden resolver las PUP algunos de los desafíos financieros de las empresas públicas de servicios?

Cómo pueden los movimientos de justicia por el agua contribuir al intercambio de información y estrategias asociadas a las PUP entre las empresas públicas de agua?

Notas y enlaces

Hall, David, Jane Lettbridge y Emanuele Lobina. (2005). ‘Public-Public Partnerships in Health and Essential Services’ *Municipal Services Project*, Occasional Papers No. 9. Editores de la serie: David A. McDonald y Greg D. Ruiters, Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Transnational Institute y Corporate Europe Observatory. (2006). *Public Water for All: The role of public-public partnerships*. Documento de discusión para ‘Por un modelo público de agua: triunfos, luchas y sueños’.

“Water Operator Partnerships.” (2007). UNSGAB Water and Sanitation. <http://www.unsgab.org/bapi/wops/index.htm>

World Development Movement. (2007). *EU – Go public on the global water crisis*. Informe de apoyo. Londres: World Development Movement. de apoyo. Londres: World Development Movement.

Caso 12

Cooperativas de empleados en el sector del agua: El caso de Dhaka WASA

Introducción

En este caso referido a Bangladesh, un novedoso plan de gestión pública del agua impulsado por los trabajadores ofrece una alternativa clara y preferible a los planes promovidos por el Banco Mundial. Sin embargo, el nuevo sistema de gestión corre el riesgo de imitar las ineficiencias de los proveedores privados, lo cual plantea interrogantes persistentes acerca de cómo evitar dichos riesgos.

A principios de 1990, la Autoridad de Saneamiento y Abastecimiento de Agua (WASA) de Dhaka, en Bangladesh, se hallaba en dificultades para satisfacer la demanda de agua, debido en parte a las fugas crecientes de agua no contabilizada y un bajo rendimiento en la cobranza de tarifas. Para satisfacer la demanda creciente y reducir su dependencia de las aguas subterráneas, Dhaka WASA decidió construir una planta de tratamiento de agua superficial.

El crédito del Banco Mundial propuesto a Dhaka WASA para este proyecto estaba condicionado a la realización de un estudio de factibilidad de una eventual privatización, y la privatización experimental de la facturación y cobranza de tarifas y otras actividades. Los empleados de Dhaka WASA, especialmente los miembros de la sociedad cooperativa de consumo de los empleados de WASA (ECSCSL, por su sigla en inglés), rechazaron estos condicionamientos, principalmente por temor a perder sus empleos. Tras discusiones con representantes del gobierno y la gerencia de Dhaka WASA y el Banco Mundial, se decidió que sólo se privatizaría una zona y que a la cooperativa de empleados se le asignaría otra zona, de manera experimental, por un año.

La empresa privada y ECSCSL comenzaron a funcionar en septiembre de 1997. En 1998, el comité de monitoreo evaluó que ECSCSL había funcionado mejor que la compañía privada, con mayores aumentos en la cobranza de tarifas y reducciones del “agua no contabilizada”. Tras esa evaluación, Dhaka WASA le pidió a ECSCSL que se hiciera cargo de otras dos de sus siete zonas de cobranza, y desde entonces ECSCSL ha estado trabajando al amparo del Programa de Mejora de Funcionamiento (PPI, por su sigla en inglés).

La mayoría de los trabajadores que participan en el PPI están en comisión de Dhaka WASA. Parte de su éxito, parece, es el aumento sustancial de salarios que paga Dhaka WASA. Parece que los habitantes de los barrios pobres también se han beneficiado del modelo de la Cooperativa de Empleados, ya que los trabajadores realizan conexiones de agua en hogares informales, algo que las reglas de Dhaka WASA normalmente no permiten.

Al comienzo de cada año fiscal, la gerencia de Dhaka WASA fija metas de facturación, cobranza y disminución del agua no contabilizada para cada zona. La Cooperativa de Empleados ha cumplido con las metas todos los años, gracias en parte a simples cambios como garantizar que los clientes reciban las facturas una vez por mes, en lugar que cada dos meses (como era el caso en las zonas manejadas por Dhaka WASA), lo que ha determinado un aumento ininterrumpido de los ingresos. La gran carga de trabajo y la menor cantidad de feriados está compensada por incentivos más altos y paquetes salariales atractivos para los trabajadores. Los trabajadores están continuamente bajo presión para cumplir con las metas, y la gerencia del PPI se reserva el derecho de devolver a los empleados nuevamente a Dhaka WASA. La gerencia del PPI también contrata gente del sector privado fuera de Dhaka WASA, principalmente en zonas específicas de cobranza.

Sin embargo, un estudio independiente de la Cooperativa llevado a cabo en 2004 por iniciativa de la Junta Directiva de Dhaka Wasa, revela que las autoridades de Dhaka WASA tienden a subestimar las metas financieras en las zonas de la cooperativa con el propósito de ayudar al programa PPI. Además, el modelo PPI da lugar a un conflicto de intereses entre los trabajadores dentro de Dhaka WASA, ya que los trabajadores del PPI reciben un salario hasta tres veces mayor que el de los trabajadores que cumplen las mismas funciones en Dhaka WASA. En consecuencia, el costo de la cobranza de tarifas en las zonas del PPI casi se ha duplicado, lo que sugiere que el éxito en las zonas del PPI puede ser más estadístico que real.

El modelo de recuperación de costos del PPI puede ser una alternativa a la privatización completa, ya que los trabajadores de los servicios públicos no pierden sus empleos. No obstante, también puede ser un paso hacia la privatización, preparando el camino para un sistema más plenamente corporativizado y mercantilizado de servicios de abastecimiento agua potable.

Preguntas

En qué valores debe fundarse la gestión pública del agua?

Cómo hacemos para promover un control más democrático del agua y a la vez más transparencia y responsabilidad en estos sistemas?

En qué momento puede decirse que un sistema de gestión pública del agua ha cruzado la raya y se “corporativizado” o “mercantilizado”?

Notas y enlaces

Sitio web de Dhaka WASA: <http://www.dhwa.org.bd/>



Caso 13

Retomar el control público de una gran empresa de agua: Yorkshire Water y Welsh Water

Introducción

En junio de 2000, Yorkshire Water (una empresa privada creada en 1989 en la época de la privatización de la industria de abastecimiento de agua de Inglaterra y Gales) reveló sus planes de ‘socializar’ su negocio a través de la creación de una “mutual comunitaria” sin fines de lucro. Los consumidores serían dueños de los activos, y el funcionamiento y mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua continuaría en manos de una nueva empresa privada. Según difundían los comunicados de prensa de Yorkshire Water, los clientes se beneficiarían de la mutualización. Se podría encontrar financiamiento nuevo y más barato que permitiría mayores inversiones y reducciones en las facturas. El conflicto de intereses entre el accionista y los consumidores se eliminaría, afirmaba la empresa.

La noticia hizo titulares: “La privatización, ¿se ha completado?” La pregunta comenzó a parecer menos rebuscada en los meses siguientes, después que se revelaron los planes para ‘mutualizar’ el negocio del agua. Una empresa de agua inglesa propuso formalmente mutualizar (reorganizar para que la mayoría de las acciones sean propiedad de los clientes consumidores o los empleados); otros pusieron sus activos en venta, y otros más propusieron un refinanciamiento radical de sus negocios principales, retirándose de los mercados de valores que habían sacado a flote a las empresas públicas de agua una década atrás.

Las propuestas de devolución de la infraestructura de abastecimiento de agua potable a manos públicas a través del modelo “mutual” han atraído mucho interés, al tratarse del influyente modelo británico de privatización del abastecimiento de agua, y en virtud de la creciente participación del sector privado en el abastecimiento de agua potable en todo el mundo en la última década. Algunos analistas han descrito las propuestas de reestructuración como una “retirada” de la ofensiva privatizadora, y como una reafirmación de los ámbitos o bienes comunes, o de la comunidad frente a la ‘mercancía’ como relación de propiedad.

En realidad, muchas de esas propuestas –como la de Yorkshire Water – fueron intentos apenas velados de las empresas de agua privadas que pretendían venderle sus activos no rentables a los consumidores – a pérdida. Una de los motivos principales por los que las empresas privadas comenzaron a flaquear fueron las reglamentaciones más estrictas aplicadas por el gobierno del Partido Laborista luego de su elección en 1997. Como los activos que se les estaban vendiendo a los clientes no eran rentables, fueron rechazados por el regulador económico de la industria, Ofwat. Preocupado por el crecimiento de la pobreza asociada al agua y las tarifas elevadas mientras que los precios de las acciones, los dividendos y los sueldos de los directores ejecutivos aumentaban vertiginosamente, Ofwat anunció una reducción de las tarifas que las empresas podían cobrarles a los consumidores. Tras una década de rendimientos más altos que los del mercado bursátil, los precios de las acciones de las empresas de agua cayeron abruptamente, aproximadamente un 50 por ciento.

Una propuesta que sí contó con la aprobación del regulador económico fue la conversión de Welsh Water en una empresa sin fines de lucro, propiedad de sus miembros y limitada por garantía (una modalidad común de las fundaciones en el Reino Unido). Con cuatro millones de clientes, Welsh Water (ahora Glas Cymru) es una de las mayores empresas abastecedoras de agua potable en el mundo, y es un ejemplo importante de cómo un modelo sin fines de lucro puede funcionar a gran escala. Algunos hechos importantes acerca del ejemplo de Welsh Water/Glas Cymru así lo ilustran:

- Se conformó mediante la venta de títulos a una nueva empresa para buscar inversiones, en lugar que a través del método de la “mutualización”.
- Se financia enteramente con endeudamiento, que es una fuente más barata de financiamiento que las el capital accionario. Esto redujo significativamente las facturas de los consumidores, y generó un excedente que puede invertirse en la red y en medidas de protección ambiental, usarse para construir reservas financieras o devolverse a los clientes.
- La estructura de gobernanza está diseñada para promover la participación: los miembros de Glas Cymru, que no tienen ningún interés financiero en la empresa y no reciben dividendos, y representan un corte transversal de la comunidad galesa.

- Los activos se vendieron al público a un precio razonable.
- La nueva empresa contó con amplio respaldo democrático de la Asamblea galesa.

Una última lección que nos ofrece este caso es el fracaso de una de las justificaciones clave del modelo británico de privatización del abastecimiento de agua. Los defensores de la privatización argumentan que solventar las inversiones con valores de la bolsa, aunque sea más caro que hacerlo con deuda pública, presiona a los gerentes a lograr mejoras importantes de eficiencia que compensan el aumento en el costo del capital. A finales de la década de 1990, la mayoría de las empresas de agua privatizadas del Reino Unido habían tomado distancia del financiamiento con capital accionario, argumentando que el financiamiento mediante deudas era mucho más económico. Esto puso en cuestión una de las justificaciones claves de la privatización: que los mercados de valores, debido al escrutinio al que están sujetos los gerentes, son la mejor opción de financiamiento. Si se opta por el endeudamiento, entonces la posibilidad de tener empresas de servicios de abastecimiento de agua del gobierno o comunitarias lógicamente se convierte en la opción preferencial. El modelo británico de privatización del agua, según el patrón ideado originalmente por el gobierno de Thatcher, fracasó en sus propios términos.

Preguntas

Cuáles son las maneras más efectivas de trazar estrategias y actuar para “recuperar” las empresas públicas de agua que fueron privatizadas?

Qué tipo de relaciones se deberían establecer o promover con partidos políticos y autoridades para avanzar en pos de estas metas?

Notas y enlaces

Sitio web de Glas Cymru: <http://www.dwrcymru.com/English/Company/Glascymru/>

Sitio web de Yorkshire Water: <http://www.yorkshirewater.com/>



Crédito de foto, Instituto Sobre la Naturaleza y la Sociedad Oaxaquena

Caso 14

Democracia hidrológica en acción: Asociaciones de gobernanza delegada (o compartida) del agua

Introducción

La gobernanza delegada (o “concedida”, “compartida”, o “colaborativa”) puede definirse ampliamente como la participación de agentes no estatales en la toma de decisiones relacionadas con la gestión del agua. Esto implica frecuentemente (pero no siempre) que se deba delegar la toma de decisiones a instancias de gobernanza de rango más bajo tales como la cuenca, la municipalidad o la región. Las asociaciones de cuenca se componen de partes interesadas con enfoques y puntos de vista diversos. Los comités de cuenca son grupos generalmente más pequeños, iniciados por individuos particulares en lugar que por el gobierno, y están compuestos por individuos con puntos de vista afines, ya sea como propietarios de tierras o como ambientalistas, por ejemplo.

En Estados Unidos existen cientos de comités de cuenca —es decir, grupos establecidos para monitorear las vías fluviales— y la Directiva Marco de Aguas (DMA) de la Unión Europea exige ahora legalmente que se establezcan comités de cuenca en todas sus cuencas hidrográficas. Las asociaciones de gobernanza delegada del agua implican a menudo lo siguiente:

- Delegación de la gobernanza del agua de manos del gobierno (o las autoridades competentes) a una instancia más local, de menor rango jerárquico.
- Mayor involucramiento de una gran variedad de agentes no estatales.
- Delimitación según límite hidrográficos tales como una cuenca, en lugar que a partir de fronteras políticas.
- Procesos participativos de toma de decisiones, priorizando a menudo la construcción de consensos y confianza recíproca.
- Toma de decisiones basada en el conocimiento científico, exigiendo a menudo investigaciones exhaustivas.

Se han incorporado varios aspectos de la gobernanza delegada a iniciativas de gestión de agua anteriores (tales como las agencias de cuenca como la Tennessee Valley Authority). Quizás el aspecto más novedoso de las asociaciones de gobernanza delegada del agua es la participación de un gran número de partes interesadas que representan diversos intereses que se tratan recíprocamente casi como iguales, y la idea de que la toma de decisiones no debe confiarse exclusivamente a los expertos del gobierno.

Las posibles ventajas de la gobernanza delegada incluyen:

- Acceso al conocimiento “local” que puede mejorar la calidad de la toma de decisiones
- Capacidad de adaptar los programas regulatorios para satisfacer las condiciones locales
- Empoderamiento de las partes interesadas (especialmente de aquellas tradicionalmente marginadas)
- Reforzamiento de la “confianza social” entre las partes interesadas, y disminución de los conflictos por usos del agua que compiten entre sí
- Mayor cooperación en el intercambio de información
- Mayor legitimidad política (y por lo tanto mayor aplicabilidad) de los planes de manejo de aguas resultantes
- Más resultados positivos que cuentan con la aprobación y el respaldo de intereses influyentes

Las posibles desventajas incluyen:

- Interés focalizado en temas ambientales locales, excluyendo otras preocupaciones ambientales de índole regional o nacional
- Énfasis en el consenso, lo cual conduce a soluciones políticamente viables, en lugar que a soluciones ambientalmente óptimas

- Representación desigual e inequitativa de las partes interesadas a nivel local
- Su viabilidad se puede ver debilitada a largo plazo por la gran dedicación de tiempo voluntario que requiere (con el riesgo de “desgaste” consiguiente)
- Mayores costos generales, y más tiempo requerido para producir resultados, tales como planes de uso del agua o planes de manejo de cuencas.

Factores de éxito

Las investigaciones académicas sugieren que hay muchos factores que pueden aumentar las posibilidades de éxito de las asociaciones de gobernanza delegada del agua. Los cuatro factores mencionados más frecuentemente en uno de los estudios de mayor envergadura hasta la fecha sobre las asociaciones de gobernanza delegada del agua en Estados Unidos (Leach & Pelkey, 2001) fueron: financiamiento sustentable; liderazgo y gerencia efectivos; confianza interpersonal entre los participantes; y participantes comprometidos. Otros factores a los cuales se hizo mención fueron:

- Contar con una membresía amplia e incluyente
- Tiempo adecuado, reglas de procedimiento bien definidas.
- Mecanismos formales de implementación
- Comunicación efectiva
- Información técnica y científica adecuada
- Monitoreo adecuado, niveles bajos o medios de conflicto
- Alcance temporal y geográfico de actividades limitado (maneable)
- Capacitación en técnicas de colaboración
- Recursos comunitarios adecuados.

Los gobiernos no pueden proveer o gestionar todos estos factores para el éxito, aunque sean gobiernos quienes hayan iniciado la asociación. Esto sugiere que el proceso para intervenir en asociaciones de gobernanza delegada debe reconocer que no siempre se dan las condiciones para que funcionen los enfoques participativos y de colaboración, y por lo tanto dichos enfoques no siempre son apropiados.

Preguntas

El Banco Mundial y el FMI han estado promoviendo proyectos de devolución o descentralización desde hace años como parte de sus programas de ajuste estructural. Deberían los movimientos de justicia por el agua acaso adoptar este tipo de modelos? Si es así, cómo lo hacemos de manera que se siga promoviendo la equidad, la democracia y la sustentabilidad?

De qué manera pueden las iniciativas y sistemas regionales y nacionales apoyar los esfuerzos de promoción del control democrático local del agua?

Notas y enlaces

Ver la *Directiva Marco de Aguas europea* en

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html y visitar el sitio web de la *Tennessee Valley Authority*, en <http://www.tva.gov/>.



Crédito de foto, Grassroots International

Caso 15

Mito de la pobreza pública cuestionado: Mecanismos alternativos de financiamiento

Introducción

Uno de los mitos más perdurables en el debate sobre abastecimiento público-privado es la idea de que el financiamiento público es insuficiente, y que el capital privado –en alguna de sus modalidades– es la única solución a la crisis mundial de abastecimiento de agua.

El retiro parcial del sector privado de regiones específicas (como África) y tipos específicos de contratos (zonas rurales, ciudades pequeñas) durante los últimos años ha llevado a algunos defensores de la participación del sector privado a sugerir la necesidad de subsidiar al capital privado a través de transferencias directas de ayuda, garantías de mitigación del riesgo y otras estrategias de mitigación del riesgo como el “Devaluation Liquidity Backstop Facility” del Informe Camdessus, diseñado para mitigar o eliminar el riesgo del mercado cambiario para las multinacionales (Winpenny, 2003). Política y técnicamente imposibles, las propuestas de Camdessus han encontrado poco respaldo, aunque algunas se están implementando actualmente.

Los mecanismos alternativos de financiamiento pueden ofrecer, sin embargo, fuentes de inversión nuevas y en algunos casos inesperadas. La evolución del financiamiento de la industria del agua en el Reino Unido desde su privatización en 1989 es un buen ejemplo. En 2001, las empresas de abastecimiento de agua potable habían empezado a sostener abiertamente que el capital accionario era una fuente de financiamiento cara, y que otras fuentes, como el endeudamiento, eran más viables a largo plazo. Siguiendo este argumento, la mayoría de las empresas de abastecimiento de agua británicas reestructuraron su financiamiento usando deudas a largo plazo (tales como los bonos), lo cual requería proteger el monopolio del agua como negocio de poco riesgo y pocas ganancias, frente a las actividades más riesgosas financiadas con capital accionario. Esto directamente contradecía uno de los argumentos clave a favor de la privatización: que la inversión de capital accionario es la mejor opción porque presiona a los gerentes a lograr mejoras importantes de eficiencia que compensan el aumento en el costo del capital. Por otro lado, los opositores de la privatización argumentan que la deuda, y en particular la deuda pública, es tanto más económica que el capital accionario, que ninguna mejora de la eficiencia bajo un régimen de propiedad privada podría compensar el incremento en el costo del capital.

Visto que cada vez con mayor frecuencia se reconoce la viabilidad limitada del financiamiento privado, y que el costo de proveer y reemplazar infraestructura ambiental urbana básica excede por lejos la eventual inversión privada y los flujos de ayuda internacional combinados, es necesario entonces considerar métodos alternativos de movilización de fondos para esos fines. Dichos métodos financieros existen, por supuesto, en la mayoría de los países desarrollados. Quizás el más conocido de ellos sea el programa de ‘fondos estatales renovables para el agua limpia’ (Clean Water State Revolving Funds) en Estados Unidos, que le brinda a los estados financiamiento blando –que puede incluso aprovecharse para generar capital adicional para obtener préstamos– para inversiones en infraestructura con el fin de mejorar la calidad del agua (Travis, Morris & Morris, 2004). Otros modelos –como el tributo de la Juntas de Agua y el “modelo de auto financiación” del Banco en Holanda– siguen principios similares: financiamiento blando con criterios de inversión estrictos, enfocado en metas globales de gestión del agua y para la construcción de infraestructura urbana de abastecimiento de agua (Uijterlinde, Janssen & Figueres, 2003).

El éxito de estas iniciativas y de otras similares ha sido tal, que USAID y la Agencia de Protección Ambiental recientemente crearon un programa para extender el modelo de los fondos estatales renovables a los países en desarrollo (especialmente a países de ingresos medios con altas tasas de ahorro y disponibilidad de capital interno). En el marco de ese programa, hay diversas estrategias nuevas para promover y acceder a los mercados locales de capital público (como la emisión de bonos municipales) que ya han demostrado ser exitosas en países como la India y México. Cabe destacar que los fondos locales utilizados en estos casos tienen ventajas (se evitan los riesgos asociados al mercado cambiario; mayor posibilidad de rendición de cuentas; rol catalítico del financiamiento con bonos en la reforma amplia de la gobernanza urbana) que superan el costo de salvar las posibles barreras (obstáculos legales, la pequeña escala de muchos de los proyectos de infraestructura urbana, la ausencia de capacidad local para

la calificación crediticia). La iniciativa conjunta de USAID y el JBIC (Banco de Cooperación Internacional del Japón) conocida como “Agua limpia para la gente” se basó en ese modelo, apoyando por ejemplo la generación de financiamiento al estilo de los fondos estatales renovables en Filipinas e India (en los estados de Karnataka y Tamil Nadu), además de brindar subvenciones y garantías de inversión en moneda local (diseñadas a estimular a las instituciones financieras locales a que le brinden crédito a nuevos sectores y zonas con carencias de servicio) en caso necesario. Un aspecto importante es que el modelo de USAID supera la falta de acceso a los mercados de capital y elimina el riesgo asociado a los mercados cambiarios, al que están sujetos los proyectos financiados con fondos privados, multilaterales o bilaterales.

Preguntas

Deberían los movimientos de justicia por el agua acaso promover el financiamiento para el agua con “deuda pública” en lugar que con “deuda privada”?

Cuáles son los obstáculos, riesgos y oportunidades de este cambio de enfoque?

Cuáles organismos gubernamentales de cooperación para el desarrollo en los países del Norte se muestran más favorables a los objetivos del movimiento de justicia por el agua?

Dónde trazan la línea los movimientos de justicia por el agua con respecto a distintos tipos de participación privada?

Es acaso admisible aceptar préstamos de un acreedor privado?

Qué tipo de participación no lo es?

Notas y enlaces

Por más información sobre iniciativas de microcrédito visitar: http://www.lboro.ac.uk/well/resources/Publications/Briefing_per_cent20Notes/BN16_per_cent20Local_per_cent20financing.htm

Sobre la “iniciativa de créditos de agua”, ver: <http://www.water.org/waterpartners.aspx?pgID=866>



Crédito de foto, Grassroots International

Caso 16

MAMA-86 y el agua en Ucrania

Introducción

Con un Estado pos-soviético demacrado y tras la “terapia de shock” económica aplicada por Occidente, los servicios públicos en Ucrania andaban a los tumbos y la gente sufrió. En ese contexto, los agentes no estatales como el movimiento/ONG MAMA-86 entraron en escena para intervenir con firmeza en nombre de los ciudadanos más pobres y las instituciones sociales asediadas de Ucrania.

MAMA-86 es una ONG dirigida por mujeres que ha llevado a cabo luchas tanto en contra de las soluciones para el agua basadas en la privatización y a favor de sistemas públicos de abastecimiento que tienen como meta el acceso universal. Esta organización surgió y se lanzó a la acción como respuesta a la dura realidad que se encontró tras la difícil transición pos-comunista: en 2005 se estimó que el 25% de la infraestructura de abastecimiento y distribución del agua había cumplido su vida útil, mientras que el 22% de los sistemas de abastecimiento se encontraban en “estado de emergencia” y 35% estaban desgastados y en malas condiciones.

Con mujeres ucranianas al frente de la cruzada sosteniendo que el agua potable era su preocupación central y el problema más urgente a resolver, MAMA-86 contribuyó a lanzar campañas así como iniciativas comunitarias y ciudadanas para fomentar el control comunitario con respecto a prioridades básicas tales como el análisis y limpieza de los pozos, investigar los niveles de contaminación de las fuentes de agua, e instalar sistemas de saneamiento y agua potable en instituciones esenciales como las escuelas y hospitales. También han promovido la utilización de contadores de agua como herramienta para generar conciencia sobre el uso y desperdicio de agua, y participaron en iniciativas educativas sobre las enfermedades transmitidas por el agua y sobre estrategias de conservación.

En un caso ejemplar y poderoso a nivel local, MAMA-86 les brindó asesoría legal y recursos a los residentes locales de Odessa que luchaban contra una medida antidemocrática de un jefe local que había autorizado cederle en “alquiler” una parte de la cuenca del río Kuchurgan a cinco empresarios. Esa decisión dio lugar a la instalación de represas ilegales que secaron el río, provocando muchísimo daño a los agricultores locales y los habitantes de la ciudad. Ese contrato se anuló con la ayuda de MAMA-86. La organización también contribuyó a la elaboración de marcos legales y políticos nacionales encaminados a garantizar equidad para todos en el acceso al agua. Además, a pesar de los intentos del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo de brindarle trato preferencial a la empresa transnacional del agua Suez, MAMA-86 contribuyó a liderar la oposición y eventualmente bloquear la oferta de esa empresa en la licitación para la privatización del sistema de abastecimiento de agua de Odessa.

Preguntas

Existe acaso el peligro de una “privatización sigilosa” si se celebra el papel y la participación de una ONG en la prestación de servicios de abastecimiento de agua?

Muchos critican las ONG y las organizaciones de la sociedad civil destacando el hecho que no son democráticas, más allá de su membresía (o incluso internamente). Necesitamos acaso normas de calidad e indicadores para evaluar el trabajo de dichas organizaciones que luchan en pos de la justicia en torno al agua?

Notas y enlaces

Por más información, ver el capítulo “Ucrania: Mujeres contra la pobreza y la privatización”, en *Por un Modelo Público de Agua: Triunfos, Luchas y Sueños*, y el sitio web de la organización, en http://www.mama-86.org.ua/drwater/drwater_e.htm.

Ver también el artículo reciente sobre su trabajo en la revista “Sanitation Now”.



Caso 17

Tarun Bharat Sangh y el agua comunal en Rajastán

Introducción

Rajendra Singh y otras personas de la organización local Tarun Bharat Sangh (TBS) en la provincia árida de Rajastán en la India, han contribuido a liderar con su ejemplo la implementación de soluciones locales impulsadas y controladas por la comunidad, revitalizando a tal efecto iniciativas locales para el agua que han prosperado por milenios en las regiones áridas del norte de ese país.

Se estima que la tasa de crecimiento demográfico en Rajastán es la más alta del país, pero la región también está sufriendo de escasez de agua y estrés hídrico crecientes. En India, debido a las extracciones y “minería” excesivas de agua subterránea, el abastecimiento de este recurso escasea en Nueva Delhi, Punjab, Haryana, Rajastán, Bihar, Madhya Pradesh, Gujarat, Daman, Diu, Andhra y Tamil Nadu. En especial Rajastán, con un 5,4 % de la población nacional, 18,7 % del total del ganado del país y 13,9 % del total del “área cultivable”, sólo cuenta con el 1,16% del agua superficial del país y 1,7% de los recursos hídricos subterráneos.

Liderada por mujeres, que tradicionalmente asumen la responsabilidad de proveerle agua fresca segura a sus familias, la organización no gubernamental Tarun Bharan Sangh (TBS) ha participado en la construcción de pequeños reservorios hechos de tierra, conocidos como johads, que ayudan a juntar agua de lluvia y mejorar la recarga de los recursos hídricos subterráneos. TBS reúne a personas interesadas en la problemática de la gestión de los bosques y los recursos hídricos, y como consecuencia del trabajo organizado que empezó a llevar a cabo en Alwar en 1985, se han construido miles de johads desde que Ragendra Singh y TBS incrementaron su activismo.

Los resultados han sido impactantes y asombrosos: cinco ríos que solían secarse tras la temporada anual del monzón están vivos nuevamente, los niveles de agua subterránea han subido aproximadamente seis metros, y la cubierta forestal —que es crucial para ayudar a mantener la integridad del suelo y su capacidad de retención del agua— se ha aumentado un 33%. TBS ha contribuido además a cuestionar y desafiar importantes iniciativas de privatización y abuso de los recursos de agua dulce. En la zona de Alwar, por ejemplo, donde Singh comenzó el trabajo que luego se transformaría en TBS, la acción comunitaria no violenta ha evitado la instalación de unas 40 empresas industriales que utilizan grandes cantidades de agua (inclusive fábricas de agua embotellada y refrescos) se establezcan. En otros lugares de la India, entretanto, recaen denuncias contra importantes empresas transnacionales como Coca Cola, acusadas por la degradación extrema que provocan de los recursos hídricos y sus prácticas de manejo de desechos ambiental y socialmente destructivas. Una de las campañas actuales de TBS está enfocada en la protección del río Yamuna, cuestionando los planes de desarrollo existentes y promoviendo la conservación y expansión de los bosques en la planicie aluvial de ese río.

Algunas personas critican los métodos y el enmarque del trabajo de TBS en Rajastán, argumentando que no se le presta atención a las desigualdades existentes y la influencia desproporcionada de las elites locales dentro de los consejos de aldea o “gram sabhas”, que constituyen el estamento básico de gobernanza local bajo el sistema Panchayat introducido obligatoriamente en India en 1993. La razón de ser de los gram sabhas como unidad de gobierno local aldeano era ceder más control democrático a la toma de decisiones, con el fin de promover mayor equidad a nivel local.

Preguntas

Dada la responsabilidad desproporcionada que tienen las mujeres en las tareas del hogar, la agricultura, el abastecimiento de agua y el cuidado general de la familia, ¿cómo deberíamos trabajar, como movimientos de justicia por el agua, en pos de un mayor empoderamiento de las mujeres sin sobrecargarlas?

Cómo pueden los movimientos de justicia por el agua compartir de la mejor manera posible el conocimiento y las experiencias de alternativas y estrategias viables que promueven el control democrático del agua para el bien común?

Qué tipo de métodos y estrategias se deberían utilizar para garantizar que las estructuras democráticas locales sean realmente democráticas y equitativas?

Notas y enlaces

Por más información sobre los jobad, ver: <http://www.rainwaterharvesting.org/Rural/Traditional1.htm#joba>.

El sitio web de TBS: <http://www.tarunbharatsangh.org/index.htm>.

También un informe realizado por TBS sobre la recuperación del río Arvari:

http://www.tarunbharatsangh.org/programs/water/arvari_a-peoples_movement.pdf.

Para una visión más crítica, ver el artículo “Economía política de los Panchayats en el sur de India”, disponible (en inglés)

en: http://www.cultureandpublication.org/bijupdf/EPW_PE_Panchayats.pdf.



Caso 18

“Fideicomisos de bienes comunes” como proyecto político y económico

Introducción

Muchas personas del movimiento mundial de justicia por el agua dudan que ponerle precio al agua sea una solución. Al mismo tiempo, muchos argumentan que las pérdidas de agua por sobre-explotación y abuso pueden ser por lo menos parcialmente mitigadas mediante sistemas de fijación de precios. A semejanza de los “topes e impuestos” ofrecidos como solución para el control de las emisiones de CO², la idea de los fideicomisos de bienes comunes intenta asignarles un precio o valor a los ámbitos comunes naturales con la esperanza de restringir su explotación y reunir ingresos para múltiples usos potenciales, inclusive mejoras en la infraestructura.

La idea de un “fideicomiso de bienes comunes” está siendo considerada en el estado estadounidense de Vermont como instrumento para reducir la explotación insustentable de los “ámbitos comunes naturales” como el agua subterránea. Si se aprueba, la ley S-44 reconocería efectivamente al agua subterránea como propiedad común sujeta a limitaciones de uso y tarifas para los usuarios industriales. Al tratar de determinar el “costo verdadero” del agua, dicha iniciativa apuntaría a limitar progresivamente el uso del agua para fines que implican consumo masivo. La ley S-44 propone que a cada habitante de Vermont se le devuelva el costo de su tarifa como una especie de “dividendo” derivado del cobro de las tarifas asociadas al uso masivo de recursos hídricos. Hoy en día no se le asigna al agua subterránea un valor que refleje su “costo verdadero”, que debería incluir el costo de la degradación de los ecosistemas ocasionados por el uso excesivo y el manejo sustentable a largo plazo. Dicha ley, además, daría prioridad al uso del agua para consumo humano y para la agricultura en épocas de escasez, antes que para otros usos comerciales.

Según Peter Barnes del Tomales Bay Institute, a los elementos que componen los ámbitos comunes naturales se les deberían atribuir derechos de propiedad común, como una manera de garantizar que a nuestro planeta y sus dones, entre ellos los recursos hídricos, se los valore adecuadamente por su contribución al bienestar social y ecológico.

Barnes sostiene que un cambio de ese tipo implica una nueva forma de capitalismo que tendría el potencial de limitar la explotación y degradación ecológica, así como facilitar los dividendos individuales e incluso la inversión pública en bienes comunes y servicios públicos. En el estado de Maine en Estados Unidos, los legisladores están tratando de ampliar el alcance de la “doctrina de fideicomiso público” para que incluya al agua subterránea, ya que dicha protección legal sólo abarca actualmente a las aguas superficiales tales como los lagos y los estuarios. Tanto Vermont como Maine están considerando varias maneras de cobrar tarifas de uso adecuadamente valoradas a los usuarios industriales que consumen grandes cantidades de agua como las empresas de agua embotellada. En Michigan, por otra parte, el movimiento social de mujeres conocido como Sweetwater Alliance ha denunciado el impacto ecológico de las plantas embotelladoras de agua de Nestlé y la privatización del agua que efectivamente implica el embotellado de agua subterránea para la venta.

Hay iniciativas similares que empiezan a extenderse y prosperar por doquier. Otras campañas en Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, tienen la mira puesta específicamente en el agua embotellada y el papel tanto de las grandes como las pequeñas empresas que pretenden obtener ganancias de la mercantilización y privatización del agua para la venta a los consumidores, mediante costosas campañas publicitarias que presentan al agua embotellada como una alternativa preferible al agua corriente de las empresas de agua municipales. Al mismo tiempo, hay municipalidades locales en New Hampshire, Estados Unidos, que han comenzado a presionar por la aplicación de ordenanzas y leyes que limiten o prohíban las extracciones masivas de agua bruta de los acuíferos subterráneos para uso de las empresas embotelladoras de agua. El empuje actual de estas iniciativas hace eco de las luchas exitosas llevadas a cabo por las mujeres en Plachimada, India, contra las plantas embotelladoras de agua de la Coca Cola que han afectado seriamente los niveles de agua y la agricultura de la región.

Debería “valorarse” o tasarse el agua (asignarle un precio que puede variar según su uso) para conservarla para un uso sustentable y equitativo?

Cómo interactuarían las nuevas formas de derechos de propiedad común con los derechos de propiedad privada existentes?

Cómo podemos presionar más efectivamente a los Estados para que no tomen partido por los grandes usuarios de agua y las empresas y que en lugar promuevan el acceso universal, público y sustentable al agua?

Notas y enlaces

Ley S-44: <http://www.leg.state.vt.us/docs/legdoc.cfm?URL=/docs/2008/bills/intro/S-044.HTM>

Por información sobre los movimientos en contra de las empresas embotelladoras y el agua embotellada, ver los siguientes sitios web:

Campaña “Inside the Bottle”: www.insidethebottle.org

Food and Water Watch: <http://www.foodandwaterwatch.org/>

Sweetwater Alliance: <http://www.waterissweet.org/about.html>

The India Resource Center: <http://www.indiaresource.org/campaigns/coke/2008/cokeimplicatedteri.html>.

El libro de Peter Barnes sobre la economía de los ámbitos comunes, *Capitalism 3.0*, puede verse (en inglés) en: <http://www.capitalism3.com/>



Crédito de foto, Grassroots International

Caso 19

La lucha por agua pública en Felton, California

Introducción

En 2001, la empresa Cal-Am compró el sistema de abastecimiento de agua potable de Felton —que estaba en manos de empresas privadas desde fines del siglo XIX— como parte su adquisición de Citizen's Utilities. Poco tiempo después, RWE compró American Water.

El problema comenzó en noviembre de 2002 cuando Cal-Am provocó la ira de la comunidad de Felton imponiendo un aumento del 74 % en las tarifas. En respuesta, se creó la asociación de Amigos del Agua como Propiedad Local (FLOW, por su sigla en inglés). FLOW luchó para bajar las tarifas, le pidió al gobierno del condado crear un organismo público que tomara control del sistema de agua potable, y se opuso al plan de la empresa de empalmar dos distritos de agua.

El viernes 30 de mayo de 2008,¹ el pueblo del distrito de Felton, California, se impuso frente a una empresa gigantesca y le arrancó el control de su agua potable. Durante casi seis años, muchos de los 3.000 habitantes de Felton se organizaron para comprarle de vuelta el sistema de agua potable de la comunidad a la empresa California American Water (Cal-Am). Cal-Am es una filial de American Water, que a su vez es propiedad de la poderosa multinacional alemana de energía y agua RWE.

Menos de una semana antes que tuviera lugar el juicio de 'dominio eminente' (el derecho del Estado a expropiar por razones de utilidad pública) contra Cal-Am para determinar el precio del sistema de agua potable de Felton, el distrito de agua potable del Valle de San Lorenzo (donde se encuentra Felton) anunció que le compraría a Cal-Am el sistema por la suma de 10,5 millones de dólares en efectivo.² Cal-Am estuvo de acuerdo con la cifra para evitar así ir a juicio, dijo Jim Mosher, quien preside la comisión legal de FLOW.³

“Esta es una gran victoria para los ciudadanos de Felton, que debería servir como fuente de inspiración para que otras comunidades desafíen a las empresas de agua privadas que imponen aumentos de tarifas exorbitantes e injustificados y no protegen las delicadas propiedades de las cuencas”,⁴ dijo Mosher. “El distrito de agua potable del Valle de San Lorenzo nos representó de manera excelente, y esperamos con ansias tenerlos como administradores del sistema de agua potable de Felton”.⁵

El acuerdo establecía que Cal-Am donaría 250 acres de tierra forestada de la cuenca, a cambio de una exención de impuestos. Mosher cuestionó, sin embargo, que la transferencia de tierras fuese efectivamente una donación, ya que la tasación indicaba que era parte integral del negocio y del precio.⁶

La lucha por el agua pública en Felton ganó su primera batalla en julio de 2005, cuando FLOW encabezó la aprobación de la “Medida W”, a pesar de la acaudalada oposición de Cal-Am. La medida autorizaba la emisión de un bono por 11 millones de dólares para comprar de vuelta el sistema de agua potable. El bono sería financiado mediante un aumento de los impuestos.

El distrito de agua potable del Valle de San Lorenzo ofreció 7.6 millones de dólares por el sistema de abastecimiento de agua de Felton, pero Cal-Am rechazó la oferta. Sus directores declararon que el sistema no estaba a la venta a ningún precio, y expresaron su decisión de oponerse a cualquier propuesta de adquisición pública. Aparentemente, el objetivo de Cal-Am era impedir que se desencadenara un efecto dominó de ciudadanos que recuperan el control de sus recursos hídricos.⁷ La petición de Felton a la Comisión de Servicios Públicos de California para que ésta aprobase la compra pública propuesta fracasó a la postre, ya que la comisión sucumbió ante el poderoso cabildeo de Cal-Am.⁸

Cuatro meses después, sin embargo, RWE anunció que vendería su parte de American Water, inclusive la división Cal-Am. El motivo que esgrimieron fue que querían concentrar sus inversiones en el sector de energías europeo. Pero las actas que se filtraron de una reunión de la junta de RWE revelaron que “la empresa alemana estaba desconcertada por las dificultades para obtener ganancias en el mercado de agua estadounidense, y que sus cálculos iniciales de eficiencias y aumentos de tarifas fueron demasiado optimistas”.⁹ También hacían mención de la “resistencia política considerable contra la privatización de la industria del agua” como uno de los motivos de la empresa para retirarse del mercado de agua potable de Estados Unidos.

Cuando RWE puso Cal-Am a la venta mediante una oferta pública inicial de acciones en abril de 2008, los resultados fueron decepcionantes. RWE pensaba vender las acciones por 24 a 26 dólares, pero a último momento bajó el precio de venta a 22-23 dólares. Pero eso no fue suficiente todavía, y el día de apertura de la venta, las acciones se cotizaron a 21,5 dólares y la empresa sólo vendió el 36 % de sus acciones. Tal y como dijo el analista de mercado Bill Simpson, “esta venta no es otra cosa que una estrategia de retirada de la empresa matriz RWE”.¹⁰

Entretanto, los habitantes de Felton no retrocedieron. Cuando su oferta de compra fue desestimada, la comunidad recurrió a los procedimientos de dominio eminente para forzar la compraventa. Cal-Am respondió haciendo todo lo que estuvo a su alcance para conseguir que el sistema pareciera más costoso. Su propia tasación avaluó el sistema en 25 millones de dólares, mucho más que la oferta de Felton de 7.6 millones de dólares. Dicho valor estimado descansaba en gran parte en la afirmación de Cal-Am que sostenía que los 250 acres de cuenca debían tasarse según los ingresos futuros que generaría esa superficie por concepto de ventas de madera y desarrollo comercial inmobiliario —una metodología de tasación rechazada enérgicamente por la comunidad.¹¹

Los procedimientos de dominio eminente en California constan de dos partes: la audiencia sobre el ‘derecho de expropiación’ ante un juez para determinar si la compra sirve al interés público, y un juicio de ‘tasación’ en el cual un jurado decide cuánto vale la propiedad. En ambos casos, las tácticas de Cal-Am retrasaron el proceso y aumentaron los gastos del distrito de agua potable del Valle de San Lorenzo. Al final, la empresa asintió al derecho de la comunidad a tomar en sus manos el sistema de agua potable y llegó a un acuerdo respecto del precio de venta sin la necesidad de un juicio.¹²

“Superamos todas las tácticas de Cal-Am encaminadas a descarrilar el proceso,” dijo Mosher. “Pero al final, nuestra postura resultó reivindicada plenamente”.

Con su exitosa cruzada de seis años por el agua pública, el pueblo de Felton contribuyó a mostrarle el camino a muchas otras comunidades estadounidenses que luchan contra el control corporativo del agua.

Preguntas

Qué lecciones ofrece el caso de Felton a otras comunidades que tratan de restituir la propiedad y gestión pública del agua?

Cómo podría un fondo fiduciario federal ayudar a las municipalidades que se encuentran en aprietos para que puedan mantener y mejorar sus sistemas de agua potable y saneamiento? De qué manera podría dicho fondo ayudarle a las comunidades para que puedan comprarle de vuelta sus sistemas de agua potable a los operadores privados?

Qué leyes adicionales pueden servirles de ayuda a las comunidades como Felton? Cómo podemos hacer que se aprueben dichas leyes, tanto en Estados Unidos como en el mundo entero?

Notas y enlaces

Sitio web de Food & Water Watch: www.foodandwaterwatch.org/water

Sitio web de FLOW: www.feltonflow.org

¹ “Felton prevalece en una lucha de seis años para adquirir el sistema de agua potable de California-American Water y de la corporación multinacional alemana RWE” Comunicado de prensa de FLOW, Felton, 30 de mayo de 2008.

² Ibid.

³ Mosher, Jim. Entrevista personal. Asesor legal de FLOW. 2 de junio de 2008.

⁴ La historia reciente de la privatización del agua en Estados Unidos está plagada de fracasos y bajo rendimiento. En la década de 1990, las empresas privadas, muchas de ellas conglomerados multi-millonarios extranjeros, convencieron a las comunidades de transferirle el control de sus sistemas de agua al sector privado. Las empresas prometieron solucionar la escasez de fondos de las comunidades y encargarse de resolver los problemas técnicos y organizativos. Pero esas empresas tales como RWE, Suez y Veolia fracasaron y no cumplieron. Los desastres de los que son responsables incluyen problemas de mantenimiento en Atlanta, desbordes de cloacas en Milwaukee, corrupción en Nueva Orleans e intromisión política en Lexington. Pero al igual que la gente de Felton, en muchos lugares del mundo entero las comunidades están cuestionando y desafiando efectivamente que su agua esté en manos de grandes empresas privadas. En Estados Unidos las comunidades también están presionando por la creación de un fondo fiduciario federal que garantice un flujo confiable de dinero para la reparación y renovación indispensable de los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento, que cada una y todas las comunidades y las generaciones futuras necesitan y merecen.

⁵ Ibid

⁶ Ibid

⁷ Ibid

⁸ Ibid

⁹ Magyar, Chris J. “Crooked Pipes: FLOW prepares for the final battle against RWE for control of Felton’s water utility.” *Good Times*, 19 de marzo de 2008. Disponible en: www.gtweekky.com/news/crooked-pipes-1

¹⁰ “Wall Street unimpressed by IPO.” 5 de mayo de 2008. Disponible en: www.feltonflow.org

¹¹ Mos

¹² Ibid

Caso 20

Un fondo fiduciario para mantener el agua limpia, segura y accesible

Introducción

Muchas comunidades en Estados Unidos se están viendo en aprietos para reparar y renovar los sistemas de agua potable y saneamiento construidos hace mucho tiempo, en algunos casos en la época de la Guerra Civil. El tiempo y el aumento de la población han hecho mella en la infraestructura, que sufre pérdidas de agua y desbordes del sistema cloacal. Pagar por las mejoras genera tirantez para los presupuestos de las ciudades, sean grandes o pequeñas.

Mientras las comunidades a lo largo y ancho de Estados Unidos buscan superar las restricciones fiscales para pagar por las mejoras y el mantenimiento del sistema de agua potable, muchos funcionarios municipales enfrentan presiones para que privaticen sus sistemas de agua, haciéndoles creer que sus preocupaciones presupuestales desaparecerán con la privatización.

La presión para resolver los problemas relacionados con el agua —cantidad, calidad y acceso justo— es grande. Los organismos de salud pública lanzaron más de 25.000 advertencias en 2006 en contra del nado en las playas sobre las costas de Estados Unidos. En la mayoría de los casos, las clausuras de playas para el nado se deben a desbordes de cloacas y mal funcionamiento de las plantas de saneamiento.

El Consejo Nacional de Investigación advirtió recientemente que los estadounidenses podrían esperar más brotes de enfermedades transmitidas por el agua si no se realizan “inversiones cuantiosas” para mejorar los sistemas y tuberías de agua en Estados Unidos. De hecho, actualmente hay un déficit en Estados Unidos de más de 22 mil millones de dólares por año entre los fondos disponibles y lo que se necesita para mantener el agua en condiciones seguras para la salud humana y ambiental. El gobierno federal ha sido proclive a recortar año tras año la fuente principal de financiamiento para agua limpia. Ajustándolo a la inflación, el financiamiento federal ha caído un 70 por ciento desde 1991.

Con limitaciones presupuestales, muchas comunidades han optado por la falsa promesa de la privatización. Las grandes empresas transnacionales les han ofrecido sus servicios a muchos gobiernos municipales asegurándoles que aumentarán la eficiencia y reducirán los costos. Pero casi una década después, la amarga realidad del agua en manos privadas comienza a develarse con problemas de mantenimiento en Atlanta, desbordes de cloacas en Milwaukee, corrupción en Nueva Orleans e intromisión política en Lexington.

En realidad, las empresas públicas de servicios de agua a menudo funcionan mejor que sus contrapartes privadas y les ahorran dinero a los consumidores, abasteciendo agua limpia y segura. La Red de Infraestructura Hídrica es una coalición amplia de empresas públicas de servicios de agua, grupos de interés público y otros, que se creó para reclamar una ley nacional que salve la brecha de financiamiento mediante la creación de un fondo fiduciario. La idea es que ese fondo se financie con lo que se le cobre a los contaminadores del agua tales como los fabricantes de agroquímicos y bebidas embotelladas, y mediante un impuesto ambiental a los ingresos de las empresas corporativas. Con lo recaudado se creará un fondo fiduciario destinado a la mejora permanente de la infraestructura para el abastecimiento de agua pública segura y accesible.

Si los estados, las ciudades y los pueblos disponen de fondos federales para ese fin, la calidad del agua mejorará en todas las comunidades estadounidenses. Un mal tratamiento de las aguas residuales río arriba implica mayores costos para el abastecimiento de agua potable segura río abajo.

Un fondo fiduciario para los sistemas de agua potable ha de basarse en los siguientes principios:

- Uso ambientalmente sano de nuestros recursos hídricos;
- Prevención de la contaminación y protección de las fuentes de agua potable para la salud humana y ambiental;

- Medidas de conservación del agua para los mayores usuarios de agua, entre ellos la agricultura y la industria;
- Participación ciudadana y funcionarios públicos responsables y que rinden cuentas;
- Acceso asequible al agua para los hogares de bajos ingresos;
- Fondos públicos para las empresas públicas de abastecimiento de agua;
- Tarifas adecuadas para las industrias que degradan los recursos hídricos.

El agua es un bien común. Ya es momento de que haya un fondo fiduciario que proteja nuestra agua potable y la mantenga limpia y segura.

Preguntas

Cómo se administraría dicho Fondo? Los fideicomisarios serían electos o designados?

A la luz de las agendas políticas de corto plazo, cómo puede este Fondo mantener una visión y estrategia de largo plazo?

Quiénes son los aliados que podrían sumarse a una coalición para luchar por la creación de dicho fondo, tanto dentro de las organizaciones de la sociedad civil, como entre los funcionarios electos? Qué argumentos se pueden usar para atraer aliados a dicha coalición?

Notas y enlaces

Por más información, visitar: <http://www.win-water.org/index.shtml>



Caso 21

Por el bien público, establecer límites a la extracción de aguas subterráneas

Introducción

En Vermont, un grupo bipartidista de legisladores promovió conjuntamente una ley para proteger el agua subterránea estadual, que es un bien común del que depende todo el estado. La ley, aprobada en 2008, creó un nuevo programa de permisos de extracción de agua a gran escala y declaró el recurso como un fideicomiso público.

El Consejo de Recursos Naturales de Vermont (VNRC por su sigla en inglés) hace mucho tiempo que presiona por un programa estadual para ayudar a salvaguardar los recursos de agua subterránea de ese estado —el agua dulce y fría que corre bajo nuestros pies. VNRC ayudó a liderar una campaña exitosa que tras un largo y tenaz esfuerzo convenció al Parlamento estadual y al Gobernador de retirar a Vermont de su posición precaria como uno de los últimos estados en el país que no protegía adecuadamente ese recurso natural cada vez más valioso.

En junio de 2008, el estado de Vermont promulgó un programa global de protección del agua subterránea. El consumo descontrolado y la contaminación del agua inducida por los hogares, las granjas y las empresas amenazan este recurso esencial para la vida. Casi 66 % de la población de Vermont depende del agua subterránea para el abastecimiento de agua potable. El agua subterránea, y su interfase con el agua superficial, desempeña una función esencial de recarga de los ríos, lagos, humedales y arroyos de Vermont, contribuyendo así a mantener la calidad del agua superficial y sostener el hábitat de los peces y otras especies acuáticas.

Con la declaración del agua subterránea como un bien (o fideicomiso) público, los casi dos tercios de los habitantes de Vermont que dependen del agua subterránea para el abastecimiento de agua potable cuentan ahora con una ley que contribuirá a proteger el agua potable del sobre- consumo y la privatización, y a evitar su agotamiento.

Vermont no contaba previamente con ninguna legislación que limitara las extracciones de agua subterránea. La nueva ley establece, a partir del 2010, un sistema de permisos para las extracciones de agua superiores a 57.600 galones diarios (aproximadamente 218 metros cúbicos). La ofensiva ciudadana para esta medida de protección y conservación del agua subterránea fue impulsada por el Consejo de Recursos Naturales de Vermont (VNRC) y contó un decisivo respaldo bipartidista. La ley autoriza recabar información relevante acerca de quién está utilizando el agua subterránea, en qué cantidad, con qué propósito, y evalúa esta información con datos recabados de mapas estaduales de las fuentes de agua subterránea. El aspecto más cuestionado del proyecto de ley fue establecer las prioridades para el uso del agua subterránea, dándole prioridad al agua potable y a la agricultura a pequeña escala durante períodos de escasez de agua, antes que a otros usos comerciales. No obstante, se aplican y respetan exenciones y derechos de uso adquiridos para establecimientos agrícolas, servicios públicos de abastecimiento de agua, bomberos y algunos sistemas geotermiales. La ley declara el agua subterránea como “recurso público fiduciario”.

Los impulsores de la ley sostienen que esa designación como fideicomiso público fue muy importante para generarle al estado la obligación de gestionar sus aguas subterráneas en aras del interés público. La decisión legal aclara que el agua subterránea no es propiedad de ninguna persona, sino de todas, y que el interés público con respecto a este recurso tiene prioridad frente a los intereses privados. Hubo algunos sectores de la agricultura que opusieron resistencia enérgica, especialmente los grandes productores de leche, que rechazaron decididamente las limitaciones que les impondrían la ley a su uso del agua. Para evitar reacciones contrarias de la industria de agua embotellada y otros usuarios a gran escala, VNRC convocó varias negociaciones entre las partes interesadas para crear un programa de protección que administre el recurso. Aunque la ley avanza mucho en términos de salvaguardar el principal recurso de agua potable de Vermont, los defensores del agua como fideicomiso público se comprometieron a seguir presionando por una reglamentación estricta para la aplicación de la ley y por otras medidas de salvaguarda.

Preguntas

Cuáles son los usos prioritarios del agua subterránea para el bien público? Cómo se deberían clasificar y decidir esas prioridades?

Qué coalición en tu comunidad podría formarse para aprobar leyes que guíen el uso del agua subterránea?

Notas y enlaces

Artículo del New York Times sobre la victoria de Vermont por el agua como bien público:

http://www.nytimes.com/2008/08/21/us/21water.html?_r=1&em

Descripción del programa de agua subterránea del Consejo de Recursos Naturales de Vermont:

<http://www.vnrc.org/article/articleview/7093/1/942/>



Caso 22

Tribunal Latinoamericano del Agua: Usando leyes nacionales e internacionales como base para una ética del agua

Introducción

Cómo podemos crear una ética compartida alrededor del agua como bien común? En un contexto internacional donde la injusticia permea la sociedad y donde los tribunales frecuentemente dan la espalda a los pobres y favorecen a los poderosos, un tribunal ético – o una audiencia – puede mostrar los crímenes en contra del uso equitativo y sustentable del agua y reafirmar valores incluyentes. Los tribunales éticos operan en forma similar a los tribunales normales: recopilan la evidencia, revisan la ley y emiten veredictos. Sin embargo, utilizan legislación internacional que a veces es ignorada por los tribunales regulares. Aunque sus veredictos no son legalmente vinculantes, la atención de la comunidad nacional e internacional así como la prensa es crucial para generar presión que pueda provocar cambios.

El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) es una organización internacional de justicia ambiental autónoma e independiente creada para ayudar a solucionar los conflictos relacionados con el agua en Latinoamérica y construir un marco práctico y moral de cómo manejar mejor el agua del mundo. Su trabajo está basado en principios tales como la coexistencia en equilibrio con la naturaleza, el respeto a la dignidad humana y solidaridad entre los pueblos para la preservación de los cuerpos de agua de una región. El TLA está comprometido con preservar los comunes de agua para las generaciones futuras y garantizar acceso al agua como un derecho humano. Su legitimidad deriva de la naturaleza moral de sus resoluciones y los fundamentos judiciales en que se basan. Pactos, declaraciones y acuerdos internacionales que afirman la protección del ambiente dan soporte a la operación de esta institución.

Desde su creación en 1998, primero como Tribunal Centroamericano del Agua, han habido cuatro audiencias internacionales públicas en las cuales organizaciones han denunciado violaciones de empresas y gobiernos al derecho a agua segura y la contaminación de cuerpos de agua. A pesar de que las resoluciones no son vinculantes, tienen bases científicas y técnicas y buscan servir como herramientas para resolver conflictos de agua. Las decisiones del TLA están basadas en una visión ecocéntrica; cuestionando la visión antropocéntrica del agua que deja a la naturaleza sin ella.

Mientras que el TLA puede ser una herramienta poderosa para avanzar los comunes de agua, no puede lograr mucho por sí solo. Los conflictos del agua que se presentan para deliberar requieren del seguimiento de la comunidad y organizaciones civiles, el apoyo de la comunidad internacional y una estrategia legal dentro de los tribunales tradicionales. El veredicto del TLA puede aumentar la fuerza de un caso combinado con una estrategia legal y organizativa.

Por ejemplo, en el caso de la represa La Parota – una represa que el gobierno mexicano pretende construir en el estado de Guerrero – el TLA deliberó que el proyecto debiera ser cancelado por sus impactos sociales y ambientales. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas retomó partes de la resolución del TLA y las incluyó en sus observaciones finales (E/C.12/MEX/CO/4). Esta resolución procuró al público en general mayor entendimiento del problema y proveyó de argumentos científicos y técnicos con los cuales presionar al gobierno mexicano. Sin embargo, al momento en que se escribe este documento, la represa sigue en los planes gubernamentales y es indispensable que la movilización organizativa y el trabajo legal continúe.

Preguntas

Cómo puede apoyar un tribunal ético en avanzar en casos específicos para proteger el agua como un común?

Qué trabajo complementario se debe hacer para asegurar la implementación de las resoluciones del tribunal?

Notas y enlaces

<http://www.tragua.com/>

http://www.bcbr.org.mx/documentos/Mecanismos_NU/ORGANOS_VIGILANCIA_TRATADOS/

(5)ObservsFinalesMX-CDESC.Junio2006.pdf



Crédito de foto, Eduardo Sousa

Conclusiones

Mapeo de diversas concepciones y estrategias para el agua como bien común



Photo credit, Grassroots International

En el documento de apoyo a este informe, *“El agua nuestro bien común: hacia una narrativa del agua”* www.onthecommons.org/water.es, Maude Barlow menciona los diez principios comunes que podrían servir de cimiento a una “nueva narrativa del agua” para contrarrestar la tragedia del agua que vivimos todos los días –de acceso y control inequitativo, mercantilización, falta de sustentabilidad, y de manera urgente, de miles de millones de ciudadanos del mundo que padecen sed y sufren enfermedades asociadas al agua.

Los principios de los ámbitos comunes de agua son:

- 1) Proclamar al agua como bien común
- 2) Adoptar la narrativa de una Democracia de la Tierra
- 3) Proteger el agua a través de la conservación y la ley
- 4) Tratar las cuencas hidrográficas como ámbitos comunes
- 5) Reivindicar el control comunitario sobre las fuentes de agua locales
- 6) Defender la soberanía de las comunidades y la nación respecto del agua
- 7) Adoptar un modelo fundado en la justicia respecto del agua, no en la caridad
- 8) Reclamar el abastecimiento público y tarifas justas
- 9) Consagrar el derecho al agua en las constituciones nacionales y en un Convenio de las Naciones Unidas
- 10) Usar y ampliar la doctrina del fideicomiso público para proteger al agua

Con estos principios en cuenta, el objetivo de estos comentarios como conclusión es plantear algunos de los temas recurrentes, esperanzas, estrategias, interrogantes y concepciones en torno al agua como bien común, que están presentes en las 22 herramientas ofrecidas en esta antología. Esta tarea, obviamente, no comienza ni termina con este informe, y esperamos que agreguen sus propios casos y que a su vez, eso lleve a nuevos debates y conclusiones.

Una manera de considerar los temas centrales y las preguntas que surgen de estas herramientas y casos es analizando algunos de los conflictos esenciales que se enfrentaron en cada uno de ellos. Hay cuatro conflictos principales que pueden extraerse de las herramientas —con sus matices y contextos— y que refieren a los principios enumerados previamente:

- 1) Concepciones encontradas del agua como fundamento práctico y espiritual de la vida, contrapuestas a las de una mercancía que se compra y se vende.
- 2) Ideas contrapuestas con respecto a la propiedad y los derechos relativos al agua.
- 3) Tendencias encontradas en la gobernanza del agua —democracia e igualitarismo en pos de un control y acceso al agua más amplio, por un lado, y una “plutocracia”¹ desigualdad en el control y acceso al agua por otro lado, que conduce a una suerte de apartheid del agua, exacerbado por la marginación y exclusión de género y étnico-cultural.
- 4) Visiones encontradas del desarrollo, es decir, cuál es el estilo de vida conveniente o “sustentable”.

El primer y el cuarto conflicto se presentan como de grandes dimensiones, como un elefante en la cristalería del movimiento de justicia por el agua. Cómo definimos el rol del agua en nuestras sociedades; en realidad, qué tipo de sociedades buscamos? La diversidad de tradiciones culturales humanas, con sus maneras diferentes de organizar las relaciones, tanto dentro de la familia como en la comunidad, implican que habrá diversas maneras de considerar al agua. Muchas de las herramientas ofrecen el ejemplo de considerar el agua simultáneamente como fuente de abundancia espiritual y como recurso limitado que restringe nuestras urgencias insustentables de consumo —lo que es una manera inherentemente provocativa de supeditar las sociedades humanas a los límites de la naturaleza. La concepción de los Mohawk de pensar con siete generaciones de antelación, es decir, teniendo en cuenta en las decisiones del presente los intereses de la gente y de la tierra en siete generaciones por venir, expresa de manera correcta esa idea, por ejemplo. Los planes de St’at’imc para integrar la sustentabilidad ecológica en las iniciativas de gestión de cuencas y ríos también están fundados en la noción del agua como sagrada y limitada, y están vinculados con las iniciativas de los pueblos indígenas de Licto, Black Mesa y la región Andina que quieren crear y aplicar sus propios métodos y sistemas de manejo del agua. Queda claro que los movimientos de justicia por el agua se benefician del trabajo detallado de análisis de los sistemas de agua locales en las sociedades indígenas, que han llevado a cabo antropólogos como Boelens.

Esto nos lleva al segundo conflicto antes mencionado, vinculado a la manera en que las diferentes tradiciones culturales conciben la propiedad. La gestión crecientemente privatizada del agua (tanto en sociedades occidentales como no-occidentales) que deja a un gran número de personas sedientas y empobrecidas, es una ofensa directa al igualitarismo y la compasión que son el soporte de las tradiciones espirituales y religiosas. La lucha para preservar el agua y recuperarla como bien común es por lo tanto una reafirmación de las tradiciones espirituales de igualdad. Lo importante a recordar es que aunque las maneras de ver y apropiarse el agua son distintas entre los indígenas y los colonos, las prácticas innovadoras —incluso algunas mencionadas en este informe— pueden contribuir a moderar el énfasis excesivo en lo privado y resaltar nuestras tradiciones de índole más comunitaria.

La inclusión y la exclusión son pilares fundamentales de la noción occidental de propiedad, usualmente concebida en tres categorías diferentes: privada, común y estatal. C.B Macpherson, uno de los exponentes de la teoría crítica democrática, propone que la mejor manera de concebir la propiedad es como “el derecho de un individuo a excluir a otros de los beneficios de una cosa”.¹ Como parte de ese enfoque general, él y otros han argumentado que las nociones de propiedad occidentales y de los colonos fueron en gran medida copadas por los derechos de propiedad individuales y exclusivos, traducidos como “posesión” para beneficio privado, exclusivo e individual.

¹ *El gobierno de los ricos, “plutos”, en lugar del gobierno del pueblo “demos”.*

Las instituciones como el Banco Mundial han fomentado la eliminación o marginación progresiva de los sistemas de propiedad común del agua y de otros elementos constitutivos de los ámbitos comunes, y favorecido en cambio un enfoque individualizado de la propiedad: en otras palabras, las grandes empresas y los gobiernos del Norte tradicionalmente han impulsado nuevos cercamientos o apropiaciones de más ámbitos comunes. En los últimos tiempos, sin embargo, hasta el propio Banco Mundial ha abordado estos temas con un enfoque fragmentado. Hoy es más evidente que en lo que respecta a los diversos sistemas para administrar recursos comunes, los sistemas de propiedad individual han demostrado ser mucho más propensos a conducir al deterioro y degradación de los bienes comunes que los sistemas de propiedad común. Como menciona Maude Barlow en el documento de apoyo a este informe, el artículo de Garret Hardin titulado “La tragedia de los Comunes”² fue lo que allanó el camino para el entusiasmo en los círculos políticos por la privatización y la individualización de la propiedad. Hardin sostiene que como cada criador individual busca maximizar su cantidad de ganado que pasta en las tierras del común en virtud de su propio ‘egoísmo racional’ (económicamente concebido), esas tierras se deterioran progresivamente. Él abogó por la nacionalización o la privatización (es decir, un giro hacia la propiedad estatal o la propiedad privada) para subsanar el problema. Sin embargo, en los últimos 30 años aproximadamente desde que Hardin publicó por vez primera su artículo original, se ha llegado al consenso de que el problema no es con los sistemas de propiedad común en sí mismos, sino específicamente con los sistemas de “acceso abierto”, donde no existe ningún sistema de derechos o responsabilidades que efectivamente restrinja a los usuarios cuando se trata de usar un recurso como el agua.³

Existe una gran riqueza de ejemplos de sistemas locales de propiedad común que incluyen el agua –agricultura, silvicultura, pesca y otros recursos naturales que no son sistemas de acceso abierto. Con sus raíces en regiones, culturas y tradiciones particulares, muchos sistemas de propiedad común han sido elogiados por su capacidad de contribuir a la sustentabilidad ecológica, así como de proveer un sistema efectivo de derechos y responsabilidades para los usuarios en un determinado sistema de bienes o ámbitos comunes.

El caso de las Asociaciones de Acequias y algunas de las dificultades que enfrentan en Nuevo México, pone de manifiesto el segundo conflicto de manera emblemática. Cuando las Asociaciones prescriben cuidadosamente los deberes y derechos de cada miembro, la acción de un miembro que pretende desafiar las reglas de las Asociaciones para su propio beneficio privado, demuestra la tensión entre los derechos y la propiedad individuales contrapuestos a los derechos y la propiedad comunes. Si la legislación estadual que respeta y respalda la autoridad de las Asociaciones en el control y la gobernanza del agua en aras de la equidad y la sustentabilidad enfrenta cuestionamientos o fuera revocada, entonces los derechos de propiedad común en materia de aguas y la capacidad de las Asociaciones para proteger las Acequias podrían estar en riesgo. El deseo de una persona de desviar el agua por cualquier motivo que sea, pero centrado en sus derechos y beneficio privados y exclusivos, entra en conflicto con los derechos de un conjunto de campesinos de continuar con su estilo de vida y sus medios de sustento, cada más precarios en virtud de la escasez creciente de agua debido al cambio climático.

Al mismo tiempo, no es necesariamente así que todos los sistemas de bienes comunes estén comprometidos en la práctica con los principios de equidad y sustentabilidad. Esto nos remite al tercer conflicto mencionado anteriormente. Algunos estudios sobre sistemas de propiedad común –entre ellos los casos de la gestión comunitaria renovada en Cochabamba, Bolivia, y del derecho al agua en América Latina descritos en este informe— concluyen que algunas iniciativas de institucionalización de los derechos colectivos a los bienes comunes pueden reproducir o incluso exacerbar las inequidades existentes en términos de raza, clase y género. Estas realidades nos plantean preguntas importantes. Si algunas familias, debido a su poder económico y/o sus posesiones desproporcionadas de tierras, ejercen una influencia dominante a nivel local, incluso en sistemas de ámbitos comunes, ¿cuál es la solución para promover la democracia y la equidad, y garantizar la conservación del agua para el bien de todos? Cómo se puede garantizar que los usuarios de agua con menor poder económico (indígenas pobres, campesinos minifundistas y agricultores de subsistencia) puedan tener tanta voz en los sistemas locales de gobernanza de agua como aquellos con más poder económico –por ejemplo, los grandes terratenientes y los industriales? La permisividad de la mayoría de las políticas estaduales cuando se trata de autorizar extracciones de agua de manos de grandes usuarios empresariales que hacen uso intensivo del agua constituye un obstáculo difícil de sortear para lograr justicia en el acceso al agua a nivel local.

³ (Macpherson, 1978. *Property, mainstream and critical positions*. En *Desarrollo Sustentable: Hacia una Política Ambiental*, página 94, de Antonio Azuela. Universidad Nacional Autónoma de México, 1993)

Muchas herramientas para el agua como bien común, desde los ejemplos del Departamento Municipal de Agua y Saneamiento de Brasil, pasando por las asociaciones entre organismos públicos, hasta el caso de MAMA-86 constituyen iniciativas que apuntan explícitamente a garantizarles servicios de agua potable a quienes están mas desprovistos de poder e influencia. Pero hasta los mejores planes pueden encontrar dificultades. Incluso en el contexto de constituciones nacionales que consagran el derecho al agua, qué tipos de estrategias podemos prever o ayudar a crear para construir verdaderas democracias locales del agua, de modo tal que los individuos y comunidades e incluso los ecosistemas dispongan de voz y voto para solucionar el ‘apartheid del agua’ y la explotación no sustentable en sus variadas formas? Cómo pueden las iniciativas en pos de justicia por el agua promover de mejor manera caminos y tecnologías blandas para el agua en estos contextos difíciles –caminos y tecnologías que hagan énfasis en la conservación de este recurso vital? ⁴

Existe también el peligro de que los sistemas de ámbitos o bienes comunes puedan ser cooptados para procesos más amplios de legitimación de la explotación del agua a gran escala. Hay quienes sostienen que el entusiasmo creciente por diversos tipos de sistemas de propiedad común localizados para el agua y otros recursos puede asociarse a la necesidad de que dichos regímenes ofician como ‘zona de amortiguación’ para facilitar la explotación masiva de los ecosistemas. En Brasil, por ejemplo, los sistemas de propiedad común de los indígenas extractivistas del caucho a pequeña escala han servido como modelo de sustentabilidad ecológica desde hace siglos, y las autoridades de desarrollo como el Banco Mundial y el Estado brasileño, así como algunas ONG, también los elogian como un componente crucial para la sustentabilidad de la Amazonía. Por otra parte, el ritmo sostenido de deforestación para la agricultura (principalmente para la caña de azúcar y el etanol en Brasil) en esta región revela una tensión entre las metas de los regímenes de propiedad común e individual.⁵ El segundo, tercer y cuarto conflicto ilustran las dificultades mencionadas en dicho ejemplo. Este tipo de realidades apunta a la necesidad no sólo de democratizar el control del agua como bien común a nivel local, sino de democratizar los principios de los bienes comunes en el ámbito nacional y regional para garantizar su cumplimiento.

Asimismo, en muchas de las herramientas se plantean preocupaciones importantes sobre la gobernanza compartida o delegada y el principio de subsidiaridad, es decir, sobre la conveniencia de trasladar la formulación de políticas y su gestión tan cerca de los usuarios finales como sea posible. Aunque la descentralización del manejo de los recursos naturales es pregonada cada vez con mayor frecuencia como cura general para los males de la gestión local de los bienes comunes, dicha agenda política está salpicada de manchas en otros sectores. Desde hace años, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional vienen promoviendo activamente la descentralización de los servicios de salud y educación, con el fin de recortar el gasto público y hacerlos más eficientes. Sin embargo, la descentralización de la autoridad para administrar sistemas locales no siempre ha venido aparejada de un apoyo adecuado de otros estamentos superiores del Estado en términos del financiamiento de los servicios y la infraestructura. Muchos críticos alegan que los esquemas de descentralización que delegan la autoridad sobre los sistemas de agua potable, transfiriéndola de los gobiernos centrales a las instancias locales, son una táctica para liberarse de la responsabilidad financiera principal con respecto al tratamiento y la distribución de agua, y además no resuelven las desigualdades entre las comunidades y regiones dentro de un Estado dado.

Muchos de los casos incorporan la idea de un fideicomiso público o común para proteger los ámbitos comunes de agua y evitar que se vean absorbidos por esquemas de mercantilización. En realidad, todas estas herramientas que aquí presentamos las ofrecemos con el ánimo de que sirvan para concebir estrategias alternativas que puedan oponer resistencia exitosa a esta narrativa mercantilista cada vez más predominante. El primer y segundo conflictos se centran en esta cuestión fundamental: si nos negamos a permitir que el agua se convierta crecientemente en un objeto de mercantilización, qué clase de sistemas alternativos necesitamos para contribuir a reforzar la idea del agua como bien común y como derecho humano? Con respecto a la ofensiva por un nuevo Convenio mundial o nacional sobre el agua, discutido en muchos de estos casos: cómo podrán dotársele instrumentos efectivos de aplicación a este derecho al agua, e incorporar al mismo tiempo el derecho de la naturaleza al agua? Cómo podría un convenio mundial vinculante que consagre al agua como un bien común y como derecho humano fundamental apuntalarse asimismo a través de ‘declaraciones de los derechos de la tierra’ integradas a los sistemas normativos nacionales de los Estados participantes, ofreciéndoles a los individuos y a las comunidades la oportunidad de presentar quejas ante las autoridades locales, nacionales y regionales al respecto de la justicia en torno al agua y la restauración de los ecosistemas?

Esperamos que este informe haya ofrecido algunos modelos que puedan adaptarse y aplicarse, y también interrogantes que generen más diálogo aun. Además esperamos que la combinación de casos paradigmáticos y preguntas estimulantes puedan utilizarse como recursos de aprendizaje para forjar sistemas de gestión del agua social y ecológicamente justos. Esperamos firmemente poder continuar este diálogo y acción con ustedes en los próximos años con el fin de fortalecer este poderoso movimiento para reivindicar y recuperar el agua como nuestro bien común.

⁶ (Gleick & Wolff, 2002; Gleick 2003a, 2003b; Brandes et al, 2005)

⁷ (Goldman, 1998)

⁸ (Bond, 2008)

Bibliografía

- Aakiwumi, F. (2003). Indigenous People, Women and Water: The Importance of Local Knowledge for Project Planning in an African Context. *Greener Management International*(42), 67.
- Agarwal, B. (2000). Conceptualising environmental collective action: why gender matters. *Camb. J. Econ.*, 24(3), 283-310.
- Ahluwalia, M. (1998). "Representing Communities: The Case of a Community-Based Watershed Management Project in Rajasthan, India." Presentado en "Crossing Boundaries", la séptima conferencia anual de la International Association for the Study of Common Property, Vancouver, Columbia Británica, Canadá, junio 10-14.
- Anand, P. B. (2007). Right to water and access to water: an assessment. *Journal of International Development*, 19(4), 511-526, <http://dx.doi.org/510.1002/jid.1386>
- Annan, K. A., Secretario General de la ONU, (2005). In Larger Freedom: Towards Development, Security and Human Rights for All: Informe del Secretario General: Organización de las Naciones Unidas.
- Astephen, D. (2003). Reducing Water and Sanitation Backlogs in Rural Areas: Umgeni Water's Response as an Implementing Agent within KwaZulu-Natal, South Africa. *Greener Management International*(42), 47.
- Athukorala, K. (2006). Collective Action for Protection of Water Rights: The Case of Thuruwila, Sri Lanka. Documento presentado en la Undécima Conferencia de la International Association for the Study of Common Property (IASCP) titulada "Survival of the Commons: Mounting Challenges and New Realities", <http://dlc.dlib.indiana.edu/archive/00001830/>
- Attwater, R., Booth, C. A., Simmons, B., & Yadava, R. N. (2003). Community Based Water Resource Management and Workable Common Property. Water Resources System Operation: Memorias de la conferencia internacional sobre Agua y Medioambiente (WE-2003), diciembre 15-18, 2003, Bhopal, India.
- Bakker, K. (2003). A political ecology of water privatization. *Studies in Political Economy*, 70, 35-48.
- Bakker, K. (2007). Commons or Commodity? The Debate over Private Sector Involvement in Water Supply. En K. Bakker (Ed.), *Eau Canada: The Future of Canada's Water* (pp. 185-204). Vancouver: UBC Press.
- Bakker, K. (2007). Trickle Down? Private sector participation and the pro-poor water supply debate in Jakarta, Indonesia. *Geoforum*, 38(5), 855-868.
- Baland, J. M., Bardhan, P., & Bowles, S. (2004). *Inequality, Collective Action and Environmental Sustainability*. Princeton: Princeton University Press
- Baland, J. M., & Platteau, J. P. (2004). Collective action on the commons: the role of inequality. In J. M. Baland, P. Bardhan & S. Bowles (Eds.), *Inequality, Cooperation and Environmental Sustainability*. Princeton: Princeton University Press.
- Baland, J.-M., & Platteau, J.-P. (1999). The Ambiguous Impact of Inequality on Local Resource Management. *World Development*, 27(5), 773-788.
- Balanya, B., Brennan, B., Hoedeman, O., Kishimoto, S., & Terhorst, P. (2005). Por un Modelo Público de Agua: Triunfos, Luchas y Sueños, Transnational Institute y Corporate Europe Observatory, enero.
- Balota, A. (2004). Exercising Community Property Rights in Water Resources Management. Documento presentado en la Deutscher Tropentag 2004: Rural Poverty Reduction through Research for Development and Transformation, Humboldt-Universität zu Berlin, Facultad de Agricultura y Horticultura, octubre 5 - 7.
- Barbanell, E. (2001). *Common-Property Arrangements and Scarce Resources: Water in the American West*: Praeger/Greenwood.
- Bardhan, P. (1993). Symposium on Management of Local Commons. *The Journal of Economic Perspectives*, 7(4), 87-92.
- Bardhan, P., & Dayton-Johnson, J. (2000). Heterogeneity and Commons Management. *Proceedings Memorias de la Octava Conferencia de la IASCP sobre propiedad comun*. Bloomington, Indiana, mayo.
- Bardhan, P., & Dayton-Johnson, J. (2001). Inequality and the governance of water resources in Mexico and South India. Documento elaborado para el taller titulado 'Economic inequality, Collective Action and Environmental Sustainability', Santa Fe Institute, septiembre.
- Bardhan, P., Ghatak, M., & Karaivanov, A. (2005). Inequality and Collective Action.
- Bardhan, P., & Ray, I. (2006). Methodological approaches to the question of the commons. *Economic Development and Cultural Change*, 54(3), 655-676.
- Baril, L. K. (1992). Private Property and the Public Trust Doctrine: Developing New Paradigms for Government to Balance Individual Property Rights and Public Resource Protection. Presentado en 'Inequality and the Commons', la Tercera Conferencia anual de la International Association for the Study of Common Property, Washington, DC, septiembre 17-20.
- Benda-Beckmann, F. v., Benda-Beckmann, K. v., & Wiber, M. G. (2006). The Properties of Property.
- Benedito, P. F. B., Clarice, S., & Fatima, P. (2005). Water Charges: Paying for the Commons in Brazil. *International Journal of Water Resources Development*, 21, 119-132.
- Benjamin, C. (2006). Decentralization and Livelihoods in the Malian Sahel: Challenges of Legal Pluralism in Decentralized Natural Resource Management. Documento presentado en Natural Resources and Environment.
- Berkes, F., Colding, J., & Folke, C. (2000). Rediscovery of Traditional Ecological Knowledge as Adaptive Management. *Ecological Applications*, 10(5), 1251-1262.

- Berkes, F., Davidson-Hunt, I., & Davidson-Hunt, K. (1998). Diversity of Common Property Resource Use and Diversity of Social Interests in the Western Indian Himalaya. *Mountain Research and Development*, 18(1), 19-33.
- Berkes, F., & Wittwer, S. H. (1974). Meeting World Food Needs. *BioScience*, 24(9), 484-485.
- Birkenfeld, D. (2003). Reclaiming Water as a Commons. *Southwest chronicle*, 4(2).
- Blomley, N. (2007). Making Private Property: Enclosure, Common Right and the Work of Hedges. *Rural History*, 18(01), 1-21.
- Blumel, E. B. (2004). The implications of formulating a human right to water. *Ecology law quarterly*, 31(4), 957-1006.
- Boelens, R. (2003). Local Rights and Legal Recognition: The Struggle for Indigenous Water Rights and the Cultural Politics of Participation. *Third World Water Forum*, 16, 23.
- Boelens, R. (2005). Water rights and participatory irrigation development: the case of Licto, Ecuador. IAPAD.
- Boelens, R., & Hoogendam, P. (2002). Water Rights and Empowerment. Uitgeverij: Van Gorcum.
- Bond, P. (2008). Decentralization, Privatization and Countervailing Popular Pressure: South African Water Commodification and Decommodification. En V. Beard, F. Mirafteb & C. Silver (Eds.), *Decentralization and Planning: Contested Spaces for Public Action in the Global South*. Londres: Taylor and Francis.
- Bond, P. (2004). Reclaiming Water Pricing for Participatory Public Services. www.waterjustice.org/uploads/attachments/pdf68.pdf
- Bond, P., & Dor, G. (2002). *Unsustainable South Africa: Environment, Development, and Social Protest*. Londres: Merlin Press.
- Bond, P., & Wilson, Z. (2007). A Water Policy Revolution. *Global Social Policy*, 7(2), 143.
- Bose, P. (2006). Shift to (De)Centralisation Creates Contradictions in Policy of Managing Commons: A Case Study from Semi-Arid Tribal Districts of Western India. Documento presentado en la undécima conferencia bianual de la International Association for the Study of Common Property (IASCP): "Survival of the Commons: Mounting Challenges and New Realities", Bali, Indonesia, <http://dlc.dlib.indiana.edu/archive/00001850/>
- Boyle, J. (2003). The Second Enclosure Movement and the Construction of the Public Domain. *Law and Contemporary Problems*, 33-75.
- Braga, B. P. F., Strauss, C., & Paiva, F. (2005). Water Charges: Paying for the Commons in Brazil. *International Journal of Water Resources Development*, 21(1), 119-132.
- Brandes, O. M., Brooks, D. B., & Governance, P. P. o. E. (2005). The Soft Path for Water in a Nutshell: Amigos de la Tierra Canadá: POLIS Project on Ecological Governance, Universidad de Victoria, Canadá.
- Brannstrom, C. (2005). Decentralising water resource management in Brazil. En J. C. Ribot & A. M. Larson (Eds.), *Democratic Decentralisation Through A Natural Resource Lens*. Londres: Routledge.
- Bromley, D. W. (1992). The commons, common property, and environmental policy. *Environmental and Resource Economics*, 2(1), 1-17.
- Bromley, D. W. (1992). The Commons, Property, and Common-Property Regimes. *Making the Commons Work: Theory, Practice, and Policy*, 3-15.
- Bromley, D. W. (1992). *Making the Commons Work: Theory, Practice and Policy*. San Francisco: ICS Press.
- Bromley, D. W., & Cernea, M. M. (1989). *The Management of Common Property Natural Resources: Some Conceptual and Operational Fallacies*. Banco Mundial.
- Brown, J. R., & Rivera, J. (2000). Acequias de Comun: The Tension between Collective Action and Private Property Rights. <http://dlc.dlib.indiana.edu/archive/00000227/00/rivieraj041300.pdf>
- Bruns, B. R. (2006). Reconstituting Water Rights: Pathways for Polycentric Praxis. Documento presentado en la undécima conferencia bianual de la International Association for the Study of Common Property (IASCP): "Survival of the Commons: Mounting Challenges and New Realities", Bali, Indonesia, <http://dlc.dlib.indiana.edu/archive/00001851/>
- Bruns, B. R., & Meinzen-Dick, R. (1998). Negotiating Water Rights in Contexts of Legal Pluralism: Priorities for Research and Action. Presentado en "Crossing Boundaries," la séptima conferencia de la International Association for the Study of Common Property, Vancouver, Columbia Británica, Canadá, junio 10-14.
- Bruns, B. R., & Meinzen-Dick, R. S. (2000). *Negotiating water rights*. Vistaar y Londres: Intermediate Technology Press.
- Burchi, S. (2005). The interface between customary and statutory water rights: a statutory perspective. Documento presentado en el taller internacional titulado 'African Water Laws: Plural legislative Frameworks for Rural Water Management in Africa', Gauteng, Sudáfrica. www.indigenouswater.org/user/Customary%20Water%20Rights%20-%20Burch.pdf
- Cameron, J., & Gibson, K. (2005). Alternative Pathways to Community and Economic Development: The Latrobe Valley Community Partnering Project. *Geographical Research*, 43(3), 274-285.
- Cardenas, J. C. (2006). Overcoming asymmetries in the commons with sub-optimal strategies. En M. Basili, M. Franzini & A. Vercelli (Eds.), *Environment, Inequality, and Collective Action*. Londres: Routledge.
- Cassidy, L. (2000). CBNRM and Legal Rights to Resources in Botswana. UICN Botswana: CBNRM Support Programme. <http://www.cbnrm.bw/>

- Chikozho, C. (2002). Restructuring the Commons: Water reforms in Southern Africa in the context of global water resources management paradigm shifts. Documento presentado en la novena conferencia de la International Association for the Study of Common Property (IASCP) titulada "Commons in an Age of Globalisation". <http://dlc.dlib.indiana.edu/archive/00000805/00/chikozhoc130502.pdf>
- Coles, A., & Wallace, T. (2005). *Gender, Water and Development*. Oxford: Berg.
- Cotula, L., Orwa, N., & Muhanji, A. (2005). Securing the commons in an era of privatisation: policy and legislative challenges. Síntesis de conclusiones del segundo taller internacional de la Co-Govern network, Nakuru, Kenya, 25-28 de octubre de 2004: Jun 2005-IIED. www.ied.org/pubs/pdfs/9556IIED.pdf
- Crow, B. (2001). Water: gender and material inequalities in the global South. Center for Global, International and Regional Studies. <http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=cgirs>
- Cruz, M. C. (1989). *Water as Common Property: The Case of Irrigation Water Rights in the Philippines*. Common Property Resources: Ecology and Community Based Development. Londres: Belhaven.
- Currie-Alder, B., Thompson, L., & Bustamante, R. (2006). Insights on Water Governance: Research in the Middle East/North Africa and Latin America. www.indiana.edu/~iascp/bali/papers/Currie_alder_Thompson_Bustamante.pdf
- Dietz, T., Ostrom, E., & Stern, P. C. (2003). The Struggle to Govern the Commons. *Science*, 302(5652), 1907-1912 <http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/1302/5652/1907>
- Dilworth, R. (2007). Privatization, the World Water Crisis, and the Social Contract. *PS: Political Science & Politics*, 40(01), 49-54.
- Dixon, A., & King's. (2003). *Indigenous Management of Wetlands: Experiences in Ethiopia*. Londres: Ashgate.
- Dungumaro, E. W., & Madulu, N. F. (2003). Public participation in integrated water resources management: the case of Tanzania. *Physics and Chemistry of the Earth*, 28(20-27), 1009-1014.
- Faruqui, N. I., Biswas, A. K., & Bino, M. J. (2001). *Water Management in Islam*: United Nations Univ. Press.
- Feeny, D., Berkes, F., McCay, B. J., & Acheson, J. M. (1990). The Tragedy of the Commons: Twenty-two years later. *Human Ecology (Historical Archive)*, 18(1), 1-19.
- Ferguson, A. E. (2004). Decentralization, Participation and Access to Water Resources in Malawi. University of Wisconsin-Madison, BASIS Collaborative Research Programme. www.uneca.org/awich/reports/malawi%20water%20resources%20decentralization%20and%20participation.pdf
- Fernandez-Gimenez, M. E. (2002). Protecting the Commons: A Framework for Resource Management in the Americas *Ecological Engineering*, 19(1), 83-85.
- Fortmann, L., & Roe, E. (1985). Common Property Management of Water in Botswana. In NRC (Ed.), *Memorias de la conferencia titulada 'Common Property Resource Management'*, abril 1985, Washington: National Academy Press.
- Galaz, V. (2006). *Power in the Commons: The Politics of Water Resource Institutions in Chile and Sweden*. Tesis doctoral. Universidad de Gotemburgo, Suecia.
- Geisler, C. (2000). Property Pluralism. In C. C. Geisler, & Daneke, G. (Ed.), *Property and Values: Alternatives To Public And Private Ownership*. Washington: Island Press.
- George, J. (2006). Traditional vs. Formal Institutions in Managing Common Pool Resources: A Case Study of Traditional Drinking Water System 'Oornin' in Ramnathpuram District, Tamil Nadu, India. Documento presentado en la undécima conferencia bianual de la International Association for the Study of Common Property (IASCP): "Survival of the Commons: Mounting Challenges and New Realities", Bali, Indonesia, <http://dlc.dlib.indiana.edu/archive/00001903/>
- George, P., Berkes, F., & Preston, R. J. (1996). Envisioning Cultural, Ecological and Economic Sustainability: The Cree Communities of the Hudson and James Bay Lowland, Ontario. *The Canadian Journal of Economics / Revue canadienne d'Economie*, 29(Edición especial: Parte 1), S356-S360.
- Gibson, K., & Cameron, J. (2005). Building Community Economies in Marginalised Areas. In T. Smyth & A. Jones (Eds.), *Community and Local Governance in Australia*. Sydney: UNSW Press.
- Gibson-Graham, J. K. (2005). *Building Community Economies: Women and the Politics of Place: Women and the Politics of Place*, Bloomfield, CT: Kumarian Press.
- Gibson-Graham, J. K. (2005). Surplus possibilities: Post-development and community economies. *Singapore Journal of Tropical Geography*, 26(1), 4-26.
- Gleick, P. (2003a). Soft Path solution to 21st-century water needs. *Science*, 320(5650), 1524-1528.
- Gleick, P. H. (1996). Basic water requirements for human activities: meeting basic needs. *Water International*, 21(2), 83-92.
- Gleick, P. H. (1998). The human right to water. *Water Policy*, 1(5), 487-503.
- Gleick, P. (2003b). *Global Freshwater Resources: Soft-Path Solutions for the 21st Century (Vol. 302)*: American Association for the Advancement of Science.
- Goldman, M. (1997). "Customs in Common": The Epistemic World of the Commons Scholars. *Theory and Society*, 26(1), 1-37.
- Goldman, M. (1998). The Political Resurgence of the Commons. En M. Goldman (Ed.), *Privatising Nature: Political Struggles for the Global Commons* (pp. 1-19). New Brunswick/New Jersey: Rutgers University Press.
- Goldman, M. (1998). *Privatizing Nature: Political Struggles for the Global Commons*: Pluto Press.

- Gunderson, L. H., & Holling, C. S. (2002). *Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural Systems*: Island Press.
- Hale, S. (2007). The Significance of Justiciability: Legal Rights, Development, and the Human Right to Water in the Philippines. *SAIS Review*, 27(2), 139-150.
- Hardin, G. (1968). The tragedy of the commons. *Science*, 162.
- Harris, L. M. (2005). Negotiating Inequalities: Democracy, Gender, and Politics of Difference in Water User Groups of Southeastern Turkey. In F. Adaman & M. Arsel (Eds.), *Environmentalism in Turkey: Between Democracy and Development*. Burlington: Ashgate.
- Harris, L. M., & Gantt, W. (2007). Gender and shifting water governance: differential effects of privatization, commodification, and democratization: Land Tenure Center, Nelson Institute of Environmental Studies, Universidad de Wisconsin.
- Harvey, S., & Stringer, R. (1999). Common property water use: the case of the Southern Vales. Policy Discussion Paper, Adelaide, CIES.
- Hodgson, S. (2004). Land and water-the rights interface. *FAO Legislative Study*(84), v+120pp.
- Hoedeman, O. (2006). Public Water for All: the Role of Public-Public Partnerships. Transnational Institute y Corporate Europe Observatory. Amsterdam
- Hoffmann, I. (2004). Access to Land and Water in the Zamfara Reserve. A Case Study for the Management of Common Property Resources in Pastoral Areas of West Africa. *Human Ecology*, 32(1), 77-105.
- Homer-Dixon, T. F. (2006). *The Upside of Down: Catastrophe, Creativity, and the Renewal of Civilization*: Island Press.
- Joel, R. (2003). Water supply & sanitation as “urban commons” in Indian metropolis: how redefining the State/ Municipalities relationships should combine global and local de facto commoners. Documento presentado en la novena conferencia de la International Association for the Study of Common Property, Victoria Falls, Zimbabwe, <http://dlc.dlib.indiana.edu/archive/00000913/00/ruejt010402.pdf>
- Johnson, C. (2004). Uncommon Ground: The ‘Poverty of History’ in Common Property Discourse. *Development and Change*, 35(3), 407-433.
- Joshi, D. (2005). Misunderstanding Gender in Water: Addressing or Reproducing Exclusion. En A. Coles & T. Wallace (Eds.), *Gender, Water and Development*. Oxford: Berg.
- Kato, S. S., & Okumu, J. O. (2006). The Role of Community Based Institutions in Sustainable Management of Forest, Water and Soil: A Case Study of Mount Elgon Ecosystem, Uganda. Documento presentado en la undécima conferencia bianual de la International Association for the Study of Common Property (IASCP): “Survival of the Commons: Mounting Challenges and New Realities”, Bali, Indonesia. <http://dlc.dlib.indiana.edu/archive/00001933/>
- Kerr, J. (2006). The Watershed Commons: Lessons Learned. Documento presentado en la undécima conferencia bianual de la International Association for the Study of Common Property (IASCP): “Survival of the Commons: Mounting Challenges and New Realities”, Bali, Indonesia, <http://dlc.dlib.indiana.edu/archive/00001936/>
- Kho, J., & Aqsaoay-Sano, E. (2006). Country Studies on Customary Water Laws and Practices: The Phillipines, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). <http://www.fao.org/Legal/advserv/FAOIUCNcs/Philippines.pdf>.
- Kipuri, N. N. O. (1989). *Maasai Women in Transition: Class and Gender in the Transformation of a Pastoral Society*. Temple University, Ph.D.
- Larson, S. (2006). Water Allocation and Management Issues in Outback Australia. Documento presentado en la undécima conferencia bianual de la International Association for the Study of Common Property (IASCP): “Survival of the Commons: Mounting Challenges and New Realities”, Bali, Indonesia, <http://dlc.dlib.indiana.edu/archive/00001949/>
- Leach, W. D., & Pelkey, N. W. (2001). Making Watershed Partnerships Work: A Review of the Empirical Literature. *Journal of Water Resources Planning and Management*, 127(6), 378-385.
- Lebel, L., Daniel, R., & Badenoch, N. (2006). State, Commerce and Commons: Conservation with Communities in Upper Tributary Watersheds. Documento presentado en la undécima conferencia bianual de la International Association for the Study of Common Property (IASCP): “Survival of the Commons: Mounting Challenges and New Realities”, Bali, Indonesia, <http://dlc.dlib.indiana.edu/archive/00001953/>
- Loehman, E., & Becker, N. (2006). Cooperation in a Hydro-geologic Commons: New Institutions and Pricing to Achieve Sustainability and Security. *International Journal of Water Resources Development*, 22(4), 603-614.
- Maan, Y., Polomaing, B., Suardika, P., Asmoro, P., Merza, M.-A., & Joicey, P. (2006). Collaborative Community-Based Management of the Aesesa Watershed, Indonesia. Documento presentado en la undécima conferencia bianual de la International Association for the Study of Common Property (IASCP): “Survival of the Commons: Mounting Challenges and New Realities”, Bali, Indonesia, <http://dlc.dlib.indiana.edu/archive/00002003/>
- MacDonald, D., & Ruiters, G. (2006). Rethinking Privatisation. Towards a critical theoretical perspective. En Transnational Institute (TNI) and Public Services International Research Unit (PSIRU) (Eds.), *Public services Yearbook*. Londres y Amsterdam: PSIRU/TNI, pp. 9-20.

- MacDonald, D., & Ruiters, G. (2005). *The Age of Commodity: Water Privatization in Southern Africa*: James & James/Earthscan.
- Macpherson, C. B. (1964). *La Teoría Política del Individualismo Posesivo: De Hobbes a Locke*. Editorial Fontanella, 1970.
- Macpherson, C. B. (1978). *Property, Mainstream and Critical Positions*: University of Toronto Press.
- Mann, E. (2003). Sustainable Water Supply for a Remote Rural Community in Mozambique: Oxfam Australia and the Chicomo Rural Development Project*. *Greener Management International*(42), 59.
- Meinzen-Dick, R. (2007). Going Beyond Panaceas Special Feature: Beyond panaceas in water institutions. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 104(39), 15200-15205. <http://www.pnas.org/cgi/content/abstract/15104/15239/15200>
- Meinzen-Dick, R., & Bakker, M. (1999). Irrigation systems as multiple-use commons: Water use in Kirindi Oya, Sri Lanka. *Agriculture and Human Values*, 16(3), 281-293.
- Meinzen-Dick, R., & Knox, A. (2001). Collective action, property rights, and devolution of natural resource management: a conceptual framework. En R. Meinzen-Dick, A. Knox, & M. Di Gregorio (Eds.), *Collective action, property rights, and devolution of natural resource management : exchange of knowledge and implications for policy*. Feldafig: ZEL.
- Meinzen-Dick, R., & Pradhan, R. (2005). Analyzing water rights, multiple uses, and intersectoral water transfers. En D. Roth, R. Boelens, & M. Zwartveen (Eds.), *Liquid Relations: Contested Water Rights and Legal Complexity*: Chapel Hill: Rutgers University Press.
- Meinzen-Dick, R., & Zwartveen, M. (1998). Gendered participation in water management: Issues and illustrations from water users' associations in South Asia. *Agriculture and Human Values*, 15(4), 337-345.
- Meinzen-Dick, R. S., & Pradhan, R. (2002). Legal Pluralism and Dynamic Property Rights. CGIAR Systemwide Program on Collective Action and Property Rights, International Food Policy Research Institute. www.capri.cgiar.org/pdf/CAPRIWP22.pdf
- Merrey, Drechsel, Vries, d., & Sally. (2005). Integrating "livelihoods" into integrated water resources management: taking the integration paradigm to its logical next step for developing countries. *Regional Environmental Change*, 5(4), 197-204 <http://dx.doi.org/110.1007/s10113-10004-10088-10115>
- Moench, M., Caspari, E., & Dixit, A. (1999). *Rethinking the mosaic: investigations into local water management*. Kathmandu/Boulder: Nepal Water Conservation Foundation/Institute for Social and Environmental Transition.
- Morris, L., & FernandoGallardoCabrera, L. (2003). The Involvement of the Private Sector in Water Servicing: Effects on the Urban Poor in the Case of Aguascalientes, Mexico. *Greener Management International*(42), 35.
- Mostertman, I. (2005). Paying for the commons: an investigation into a participatory decision-making process in implementing a bulk water pricing system in the Paraíba do Sul river basin. MSc thesis, Irrigation and Water Engineering group, Universidad de Wageningen, Holanda.
- Mwangi, E. (Cartographer). (2006). Subdividing the Commons: The Politics of Property Rights Transformation in Kenya's Maasailand. CAPRI Working Paper # 46. www.capri.cgiar.org/pdf/CAPRIWP46.pdf
- Mwangi, E. (2007). Subdividing the Commons: Distributional Conflict in the Transition from Collective to Individual Property Rights in Kenya's Maasailand. *World Development*, 35(5), 815-834.
- Mwangi, E. (2005). The Transformation of Property Rights in Kenya's Maasailand: Triggers and Motivations. CGIAR Systemwide Program on Collective Action and Property Rights, International Food Policy Research Institute. www.capri.cgiar.org/pdf/CAPRIWP35.pdf
- Nellis, J. R. (2007). Privatization in Developing Countries: A Summary Assessment. *SAIS Review*, 27(2), 3-29. Documento encargado por la FAO en el marco de un proyecto conjunto de investigación FAO/UICN sobre la interfase entre los derechos consuetudinarios y los derechos estatutarios al agua, en proceso de elaboración.
- Oakerson, R. J. (1992). Analyzing the Commons: A Framework. *Making the commons work: Theory, practice and policy*, 41-59.
- Office for Sustainable Development, U. B. f. A. (2003). Chapter 3: Community-Based Natural Resource Management (CBNRM). In *Environmental Guidelines for Small Scale Activities in Africa (EGGSA)*.
- Oki, T., & Kanae, S. (2006). *Global Hydrological Cycles and World Water Resources (Vol. 313)*: American Association for the Advancement of Science.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*: Cambridge University Press.
- Ostrom, E. (2002). Reformulating the commons. *Ambiente & sociedade*, 5-25.
- Ostrom, E., Burger, J., Field, C. B., Norgaard, R. B., & Policansky, D. (2005). Revisiting the Commons: Local Lessons, Global Challenges. *Evolutionary Perspectives On Environmental Problems*, 284(9), 278-282.
- Ostrom, E., & Gardner, R. (1993). Coping with Asymmetries in the Commons: Self-Governing Irrigation Systems Can Work. *The Journal of Economic Perspectives*, 7(4), 93-112.
- Ostrom, E., Stern, P. C., & Dietz, T. (2003). Water rights in the commons. *Water Resources Impact*, 5(2), 9-12.
- Password, F. (2007). The" Commons" Versus the" Commodity": Alter-globalization, Anti-privatization and the Human Right to Water in the Global South. *Antipode*, 39(3), 430-455.

- Pollard, S. R., Cousins, T., & Toit, D. d. (2006). Seeking the Linkages: Integrating Community Governance of Water Resources and Land Tenure Reform. Documento presentado en la undécima conferencia bianual de la International Association for the Study of Common Property (IASCP): "Survival of the Commons: Mounting Challenges and New Realities", Bali, Indonesia.
- Qiu, S. (2004). Making CBNRM work: piped water system management in CB village. Resultados de investigación del CIID/IDRC, <https://idl-bnc.idrc.ca/dspace/handle/123456789/31354>
- Quiggin, J. (1993). Common property, equality, and development. *World Development*, 21(7), 1123-1138.
- Renzetti, S. (2005). Economic Instruments and Canadian Industrial Water Use. *Canadian Water Resources Journal*, 30(1), 21-30.
- Renzetti, S., & Dupont, D. (2003). Ownership and Performance of Water Utilities. *Greener Management International*(42), 9.
- Roth, D., Boelens, R., & Zwarteveen, M. (2005). Liquid relations: contested water rights and legal complexity: Rutgers University Press.
- Roy, J., & Crow, B. (2004). Gender Relations and Access to Water: What We Want to Know About Social Relations and Women's Time Allocation: Paper CGIRS-2004-5. Center for Global, International and Regional Studies, Santa Cruz, California. <http://repositories.cdlib.org/cgirs/CGIRS-2004-5>
- Sakurai, T., & Palanisami, K. (2001). Tank irrigation management as a local common property: the case of Tamil Nadu, India. *Agricultural Economics*, 25(2-3), 273-283.
- Salman, S. M. A., & McInerney-Lankford, S. A. (2004). The Human Right to Water: Legal and Policy Dimensions: World Bank Publications.
- Santos, C., & Valdomir, S. (2006). Uruguay: la democracia directa en la defensa del derecho al agua. En ILSA (Ed.), *Movimientos sociales y luchas por el derecho humano al agua en América Latina*. Bogota: ILSA, pp. 171-179.
- Saravanan, V. S. (2002). Institutionalising community-based watershed management in India: Elements of institutional sustainability. *Water Science & Technology*, 45(11), 113-124.
- Scott, C. A., & Silva-Ochoa, P. (2001). Collective action for water harvesting irrigation in the Lerma-Chapala Basin, Mexico. CGIAR Systemwide Program on Collective Action and Property Rights, International Food Policy Research Institute. www.capri.cgiar.org/pdf/CAPRIWP20.pdf
- Scruggs, L. A. (1998). Political and economic inequality and the environment. *Ecological Economics*, 26(3), 259-275.
- Sheehan, J. (2005). The Commodification of the Asian Commons: Water as a Property Right. *Asia Pacific Journal of Environmental Law*, 9(1).
- Shiva, V. (1991). *The Violence of the Green Revolution: Third World Agriculture, Ecology and Politics*: Londres.
- Shiva, V. (1997). *Biopiracy: The Plunder of Nature and Knowledge*: South End Press.
- Shiva, V. (2000). *Stolen Harvest: The Hijacking of the Global Food Supply*: South End Press.
- Shiva, V. (2002). *Water Wars: Privatization, Pollution and Profit*: South End Press.
- Shiva, V. (2005). *Globalization's New Wars: Seed, Water & Life Forms*. Nueva Delhi: Women Unlimited.
- Singh, N. (2006). Indigenous Water Management Systems: Interpreting Symbolic Dimensions in Common Property Resource Regimes. *Society & Natural Resources*, 19(4), 357-366.
- Smyth, P., Reddel, T., & Jones, A. (2005). *Community and Local Governance in Australia*. Sydney: UNSW Press.
- Southgate, C., & Hulme, D. (2000). Uncommon Property The Scramble for Wetland in Southern Kenya. In P. Woodhouse, H. Bernstein & D. Hulme (Eds.), *African Enclosures?: The Social Dynamics of Wetlands in Drylands*. Londres: James Currey Limited.
- Spiertz, H. L. J. (1998). Water Rights and Legal Pluralism: Some Basics of a Legal Anthropological Approach. Documento presentado en la séptima conferencia anual de la International Association for the Study of Common Property (IASCP), Vancouver, Columbia Británica. <http://dlc.dlib.indiana.edu/archive/00000163/00/spiertz.pdf>
- Sullivan, J. D., Rogers, J., & Bettcher, K. E. (2007). The Importance of Property Rights to Development. *SAIS Review*, 27(2), 31-43.
- Thomas, A., Carr, S., & Humphreys, D. (2001). *Environmental Policies and Ngo Influence: Land Degradation and Sustainable*: Routledge.
- Thompson, S. C., & Stoutemyer, K. (1991). Water Use as a Commons Dilemma: The Effects of Education that Focuses on Long-Term Consequences and Individual Action. *Environment and Behavior*, 23, 314.
- Travis, R., Morris, J., & Morris, E. (2004). State implementation of federal environmental policy: Explaining leveraging in the Clean Water State Revolving Fund. *Policy Studies Journal*, 32(3), 461-480.
- Trawick, P. (2002). The Moral Economy of Water: General Principles for Successfully Managing the Commons. *Gaia*, 11(3), 191-194.
- Trawick, P. B. (2003). *The Struggle for Water in Peru: Comedy and Tragedy in the Andean Commons*. Stanford: Stanford University Press.
- Turner, S. (2004). A crisis in CBNRM? Affirming the commons in southern Africa. Documento presentado en la décima conferencia de la International Association for the Study of Common Property, Oaxaca, México. http://dlc.dlib.indiana.edu/archive/00001501/00/Turner_Crisis_040508_Paper361.pdf

- Twyman, C. (2000). Participatory Conservation? Community-based Natural Resource Management in Botswana. *The Geographical Journal*, 166(4), 323-335.
- Uijterlinde, R., Janssen, A., & Figueres, C. (2003). Success factors in self-financing local water management. Amsterdam: Partners for Water.
- UNESCO. (2003). Facts and Figures - Water and Indigenous Peoples. http://www.wateryear2003.org/en/ev.php-URL_ID=5550&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
- Van Harten, G. (2005). Private authority and transnational governance: the contours of the international system of investor protection. *Review of International Political Economy*, 12(4), 600-623.
- Van Koppen, B. (1998). Gendered Water and Land Rights in Construction: Rice Valley Improvement in Burkina Faso. Documento presentado en la séptima conferencia anual de la International Association for the Study of Common Property (IASCP), Vancouver, Columbia Británica. <http://www.indiana.edu/~iascp/Final/koppen.pdf>
- Vardhan, M. (2006). Property Rights and Collective Action around Water Management in Kenya's Lower Nyando Basin. http://dlc.dlib.indiana.edu/archive/00002051/00/Vardhan_Mamta.pdf
- Vargas-Hernández, J. (2006). Co-Operation and Conflict between Firms, Communities, New Social Movements and the Role of Government: The Cerro de San Pedro Case. Documento presentado en la conferencia titulada "Old Economy Regions in the New Economy: A North/South Dialogue on social, cultural and economic issues", Thunder Bay, Ontario, Canadá. http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID879071_code76069.pdf?abstractid=879071&mirid=2
- Vasimalai, M. P. (2006). Shaping Stakeholders Perspectives: Survival of the Common Traditional Tanks in South India. Documento presentado en la undécima conferencia bianual de la International Association for the Study of Common Property (IASCP): "Survival of the Commons: Mounting Challenges and New Realities", Bali, Indonesia. http://dlc.dlib.indiana.edu/archive/00002053/00/Vasimalai_MP.pdf
- Vassolo, S., & Doll, P. (2005). Global-scale gridded estimates of thermoelectric power and manufacturing water use. *Water Resources Research*, 41(4), W04010.
- Villarroel, E., & Peredo, C. (2006). The Struggle for Water as a Common Good: The Experience of Andean Communities in Bolivia. Documento presentado en la undécima conferencia bianual de la International Association for the Study of Common Property (IASCP): "Survival of the Commons: Mounting Challenges and New Realities", Bali, Indonesia, <http://dlc.dlib.indiana.edu/archive/00002054/>
- Wandscheer, C. B. (2006). Commons Resources in Brazil: Biopiracy, Bioprospection, Biotechnology. Documento presentado en la undécima conferencia bianual de la International Association for the Study of Common Property (IASCP): "Survival of the Commons: Mounting Challenges and New Realities", Bali, Indonesia, <http://dlc.dlib.indiana.edu/archive/00002058/>
- Watkins, K. et al (2006) Informe sobre Desarrollo Humano: más allá de la escasez: poder, pobreza y la crisis mundial del agua. Nueva York: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Publicado por Mundi-Prensa
- Wheeler, E. A. (2006). Water policy alternatives for the Southern Ogallala Aquifer: economic and hydrologic implications. *Agricultural and Applied Economics*, Universidad Tecnológica de Texas, tesis de maestría en ciencias.
- Winpenny, J. (2003). Financing Water for All: Report of the World Panel on Financing Water Infrastructure. Ginebra: World Water Council/Global Water Partnership/Third World Water Forum.
- Wolff, G., & Gleick, P. H. (2002). The Soft Path for Water. *The World's Water 2002-2003: The Biennial Report On Freshwater Resources*.
- Woodhouse, P., Bernstein, H., & Hulme, D. (2000). African Enclosures?: The Social Dynamics of Wetlands in Drylands. Londres: James Currey Limited.
- WWAP. (2006). The UN World Water Development Report - Facts and Figures - Water and industry. http://www.unesco.org/water/wwap/facts_figures/water_industry.shtml
- Yamaguchi, K. (2006). Scarcity and Conflict of Resources: Chom Thong Water Conflict. Documento presentado en la undécima conferencia bianual de la International Association for the Study of Common Property (IASCP): "Survival of the Commons: Mounting Challenges and New Realities", Bali, Indonesia, <http://dlc.dlib.indiana.edu/archive/00002068/>
- Zuo, Q., Ma, J., & Wu, Z. (2005). Concept and model of "supporting capacity of water resources" in urban areas. En D. Savic, J. C. Bertoni, N. Marino & H. Savenije (Eds.), *Sustainable Water Management Solutions for Large Cities: ZUO*, International Association for Hydrological Sciences publication 293. Fontainebleu: IAHS.
- Zwarteveen, M., & Meinzen-Dick, R. (2001). Gender and property rights in the commons: Examples of water rights in South Asia. *Agriculture and Human Values*, 18(1), 11-25.

Enlaces y recursos

AFRICA

Africa Water Network (Red Africana de Agua) <http://www.africawaternetwork.org/>

Ghana

Integrated Social Development Centre (ISODEC) (Centro de Desarrollo Social Integral)

<http://www.isodec.org.gh/>

Sur Africa

Alternative Information & Development Centre (AIDC) (Centro de Información y Desarrollo Alternativo)

<http://www.aidc.org.za/>

Anti-Privatisation Forum (Foro Contra la Privatización) <http://www.apf.org.za/>

Environmental Monitoring Group (Grupo de Monitoreo Ambiental) <http://www.botany.uwc.ac.za/inforeep/emg.htm>

South African Municipal Workers Union (Sindicato Surafricano de Trabajadores Municipales) <http://www.cosatu.org.za/>

ASIA & THE PACIFIC

India

Tarun Bharat Sangh <http://www.tarunbharatsangh.org>

The Centre for Law, Policy and Human Rights Studies (Centro para los Estudios de Derecho, Política y Derechos Humanos)

<http://www.rightsresearch.org/>

Nueva Zelanda

Right to Water (Derecho a Agua) <http://www.righttowater.org.nz/>

Pakistan

Development Visions (Visiones de Desarrollo) <http://www.brain.net.pk/~daima/About.html>

Filipinas

IBON Foundation <http://www.ibon.org/>

Focus on the Global South (Enfoque en el Sur Global) <http://focusweb.org/>

LATIN AMERICA & THE CARIBBEAN

La Red Vida www.laredvida.org/

Brazil

Corsan <http://www.corsan.com.br/>

Brazil's Movement of Dam Affected People (MAB) <http://www.mabnacional.org.br/>

ASSEMAE (Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, Brazil) <http://www.assemae.org.br/>

Costa Rica

Friends of the Earth Costa Rica (Amigos de la Tierra Costa Rica) <http://www.foei.org/groups/members/costarica.html>

Ecuador

Instituto de Ecología y Desarrollo de las Comunidades Andinas (IEDECA) www.ded.org.ec/

Mexico

Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) <http://www.comda.org.mx/>

Nicaragua

Centro Humboldt <http://www.humboldt.org.ni/>

Uruguay

Friends of the Earth Uruguay (Amigos de la Tierra Uruguay) <http://www.foei.org/groups/members/uruguay.html>

EUROPE & NORTH AMERICA

Canada

Eau Secours <http://www.eausecours.org/>

Interior Alliance <http://www.puebloindio.org/>

Polaris Institute <http://www.polarisinstitute.org/>

Sierra Club of Canada <http://www.sierraclub.ca/>

The Canadian Union of Public Employees (CUPE) (Sindicato Canadiense de Empleados Públicos) <http://www.cupe.ca/>
The Council of Canadians (Concilio de Canadienses) <http://www.canadians.org/>
The Halifax Initiative (Iniciativa Halifax) <http://www.halifaxinitiative.org/>
Municipal Services Project (Proyecto sobre Servicios Municipales) – <http://www.queensu.ca/msp/>

Francia

Association pour un contrat mondial sur l'eau <http://www.acme-eau.com/>
ATTAC France <http://france.attac.org/>

Alemania

Heinrich Boll Foundation www.boell.org and <http://boell-latinoamerica.org/>

Italia

Contratto Mondiale sull'acqua <http://www.cosatu.org.za/>

Inglaterra

The Ecologist - 101 Ways Forward http://www.theecologist.org/take_action/101_Ways_Forward/
Public Services International Research Unit (Servicios Públicos Internacional – Departamento de Investigación)
<http://www.psiru.org/>

Holanda

Corporate Europe Observatory (Observatorio Europeo Sobre Corporaciones) <http://www.corporateeurope.org/>
Transnational Institute – www.tni.org

Republica de Slovakia

People and Water <http://www.changenet.sk/>

Los Estados Unidos

Corporate Accountability International (CAI) <http://stopcorporateabuse.org>
Food and Water Watch – www.foodandwaterwatch.org
International Forum on Globalisation – <http://www.ifg.org/>
Global Resource Action Center for the Environment (GRACE) www.gracelinks.org/
International Rivers Network (Red Internacional de Rios) <http://www.irn.org/index.html>
Michigan Citizens for Water Conservation (Ciudadanos de Michigan para la Conservacion de Agua)
<http://www.savemewater.org/>
Other Worlds Collaborative (Otros Mundos)– www.otherworldsarepossible.org
Public Services International – www.world-psi.org
Institute for Policy Studies (Instituto para el Estudio de Politicas) www.ips-dc.org/
Sweetwater Alliance <http://www.waterissweet.org/>
Our Water Commons (El Agua Nuestro Bien Comun) www.ourwatercommons.org
New Mexico Acequia Association <http://www.lasacequias.org>

International

Water Justice (Justicia sobre el Agua)– www.waterjustice.org
Water Remunicipalisation Tracker (Rastreador de la Remunicipalización de Agua)– <http://www.remunicipalisation.org/>

Films:

Blue Gold (El Oro Azul)– www.bluegold-worldwaterwars.com/
Flow (For the Love of Water) (Fluir – Por el Amor al Agua) – www.flowthefilm.com/
Thirst (Sed) – www.thirstthemovie.org/

Para mas informacion o para involucrarse, suscribe a los siguientes listservs:

Waterjustice listserv – comunicate con satoko@tni.org
La Red VIDA listserv – noticias@laredvida.org
Waterwarriors listserv – escribe a info@fwwatch.org

Crédito de foto, Daniel Moss



www.canadians.org



www.ourwatercommons.org



www.boell-latinoamerica.org